



Asamblea General

Distr. general
12 de agosto de 2021
Español
Original: francés

Consejo de Derechos Humanos

48º período de sesiones

13 de septiembre a 1 de octubre de 2021

Tema 4 de la agenda

**Situaciones de derechos humanos que requieren
la atención del Consejo**

Informe de la Comisión de Investigación sobre Burundi*

Resumen

Desde la llegada al poder del Presidente Ndayishimiye, el espacio democrático sigue cerrado y la tolerancia hacia las opiniones críticas sigue siendo limitada, si bien ha cambiado la dinámica de las relaciones entre Burundi y la comunidad internacional. A pesar de algunos gestos simbólicos aislados en el ámbito de los derechos humanos, no se han emprendido reformas estructurales para mejorar la situación de forma sostenible. Han continuado las vulneraciones graves de los derechos humanos a manos de agentes estatales o los *imbonerakure* con la aquiescencia de las autoridades, o incluso por instigación de estas. El estado de derecho sigue erosionándose progresivamente y en general subsisten factores de riesgo de deterioro de la situación de los derechos humanos, si bien han evolucionado.

* Los anexos del presente documento se reproducen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
A. Mandato	3
B. Cooperación de Burundi con la Comisión	3
C. Metodología	3
D. Derecho aplicable	4
II. Principales acontecimientos en los organismos internacionales y regionales	4
A. Naciones Unidas	4
B. Otros organismos	5
III. Situación de los derechos humanos	5
A. Violaciones y vulneraciones de derechos en el contexto de los incidentes de seguridad	6
B. Medios de comunicación	7
C. Sociedad civil	8
D. Partidos políticos de la oposición	8
E. Repatriados	9
F. Población en general	10
G. Justicia	12
H. Bases económicas del Estado	12
I. Estado de derecho	13
J. Responsabilidades	14
IV. Delitos en virtud del derecho internacional	15
A. Elementos constitutivos y tipología de los delitos	15
B. Responsabilidades individuales	15
V. Factores de riesgo	15
A. Panorama	15
B. Factores de riesgo	17
VI. Conclusiones y recomendaciones	19
 Anexos	
I. Carte du Burundi	21
II. Correspondance avec le Gouvernement du Burundi	22
III. Recommandations antérieures faites par la Commission	25
IV. Indicateurs des facteurs de risque communs identifiés dans le Cadre d'analyse des atrocités criminelles (A/70/741-S/2016/71)	45
V. Document	54

I. Introducción

A. Mandato

1. La Comisión de Investigación sobre Burundi fue creada por el Consejo de Derechos Humanos mediante su resolución 33/24, de 30 de septiembre de 2016, para realizar una investigación exhaustiva sobre las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos cometidas en Burundi desde abril de 2015, determinar si algunas de ellas podrían constituir delitos contemplados en el derecho internacional, identificar a sus presuntos autores y formular recomendaciones para garantizar que esas personas rindan cuentas de sus actos. El mandato de la Comisión fue prorrogado por un año en cuatro ocasiones. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 45/19 del Consejo, de 6 de octubre de 2020, la Comisión presenta este informe al Consejo y, en marzo de 2021, hizo una presentación oral ante el Consejo en su 46º período de sesiones.

2. Doudou Diène (Senegal) es Presidente de la Comisión desde el 1 de febrero de 2018 y Françoise Hampson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) es miembro desde el 22 de noviembre de 2016. Lucy Asuagbor (Camerún), que fue nombrada el 5 de marzo de 2018, dimitió el 24 de marzo de 2021 debido a las exigencias de sus nuevas funciones nacionales.

3. La Comisión sigue siendo el único mecanismo internacional independiente capaz de llevar a cabo investigaciones imparciales sobre las recientes vulneraciones de los derechos humanos en Burundi y de proporcionar un análisis profundo de la situación de los derechos humanos en ese país. Ha debido enfrentarse a retos particulares en el transcurso de su mandato. En particular, la Comisión lamenta que su trabajo se haya visto perjudicado por la crisis financiera de las Naciones Unidas, los consiguientes recortes de personal y la congelación de la contratación, que ha retrasado la constitución de su secretaría. Estos factores, así como las restricciones de circulación relacionadas con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), afectaron a la realización de las encuestas sobre el terreno, incluidas las relativas a las bases económicas del Estado y a la violencia sexual y de género.

4. El presente informe abarca las violaciones y abusos de derechos desde la toma de posesión del Presidente Evariste Ndayishimiye, el 18 de junio de 2020, y analiza los avances significativos en el ámbito de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la corrupción, y el estado de derecho. Se ha actualizado el análisis de los factores de riesgo. Las conclusiones finales de las encuestas se detallan en un documento adicional¹.

B. Cooperación de Burundi con la Comisión

5. El Consejo de Derechos Humanos reiteró su petición al Gobierno de Burundi de que cooperara plenamente con la Comisión, le permitiera visitar el país y le facilitara toda la información necesaria para el cumplimiento de su mandato. La Comisión prosiguió sus esfuerzos para establecer un diálogo con las autoridades burundesas, en particular para permitir un intercambio de información pertinente, pero el Gobierno del Presidente Ndayishimiye no respondió oficialmente a la correspondencia de la Comisión.

C. Metodología

6. A pesar de las dificultades específicas encontradas, la Comisión realizó más de 170 entrevistas específicas a víctimas, testigos y otras fuentes, residentes en Burundi o en terceros países. Ha recogido más de 1770 testimonios desde el inicio de su mandato.

¹ A/HRC/48/CRP.1 (disponible en el sitio web de la Comisión www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/CoIBurundi/Pages/CoIBurundi.aspx).

7. La Comisión aplicó la misma metodología y el mismo criterio de prueba, a saber, la existencia de “motivos razonables para creer”, que son perfectamente acordes con las directrices y las prácticas reconocidas internacionalmente para este tipo de investigación².

D. Derecho aplicable

8. El derecho aplicable sigue siendo el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional y los tratados relativos a la lucha contra la corrupción³. Burundi es parte en los mismos instrumentos que antes.

9. Burundi sigue estando vinculado por sus obligaciones en virtud del derecho internacional consuetudinario en materia delitos internacionales y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional durante el período comprendido entre abril de 2015 y el 27 de octubre de 2017, fecha efectiva de su retirada del Estatuto de la Corte⁴. A ese respecto, la Comisión se remite a las definiciones de los delitos enunciados en el Estatuto de Roma, que se recogen en el Código Penal de Burundi.

II. Principales acontecimientos en los organismos internacionales y regionales

A. Naciones Unidas

1. Mecanismos de derechos humanos

10. El Gobierno no ha autorizado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a reabrir la oficina en el país y solo acepta las actividades de capacitación y cooperación técnica del Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Democracia en África Central.

11. Ningún titular de mandato de los procedimientos especiales ha visitado Burundi recientemente y no está prevista ninguna visita a pesar de las peticiones de varios de ellos. Se enviaron a Burundi dos comunicaciones conjuntas dirigidas por titulares de mandatos de procedimientos especiales en relación con casos de presuntas violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detención y reclusión arbitrarias, torturas y asesinatos de refugiados burundeses en Tanzania, y detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de refugiados burundeses repatriados por la fuerza a Burundi⁵.

12. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha emitido cuatro opiniones en las que estimó que los casos constituían detención arbitraria, incluidos los de cuatro soldados exFAB (soldados del antiguo ejército de Burundi), detenidos en agosto de 2015 y en prisión preventiva desde entonces⁶. El Gobierno de Burundi se ha negado a cooperar con el Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas tiene 250 casos abiertos relativos a Burundi.

2. Consejo de Seguridad

13. El 4 de diciembre de 2020, el Consejo de Seguridad retiró a Burundi de su orden del día y decidió que el país se examinaría en el contexto de los informes periódicos del Secretario General sobre la Región de los Grandes Lagos y África Central⁷. El Consejo basó

² Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *Comisiones de investigación y misiones de determinación de los hechos en derechos humanos y derecho internacional humanitario: guía y práctica*, documento HR/PUB/14/7.

³ A/HRC/36/54 y Corr.1, párrs. 9 a 11. Véanse también A/HRC/36/CRP.1, párrs. 37 a 50 y A/HRC/45/CRP.1, párr. 654 (documentos disponible en el sitio web de la Comisión).

⁴ Corte Penal Internacional, *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, art. 127.

⁵ AL BDI/2/2020 y AL BDI/1/2021.

⁶ A/HRC/WGAD/2020/40, A/HRC/WGAD/2020/55, A/HRC/WGAD/2020/56 y A/HRC/WGAD/2021/9.

⁷ Véase S/PRST/2020/12.

su decisión en los progresos realizados en el país, al tiempo que subrayó que quedaba mucho por hacer para avanzar en la reconciliación nacional, la promoción del estado de derecho y de un poder judicial independiente y eficaz, la preservación del espacio democrático y el respeto de las libertades fundamentales. También señaló que las violaciones de los derechos humanos seguían siendo motivo de preocupación.

3. Oficina del Enviado Especial del Secretario General para Burundi

14. La Oficina, creada en 2015 para apoyar al país en la consolidación de la paz, cesó oficialmente sus actividades el 31 de mayo de 2021. En noviembre de 2020, el Gobierno de Burundi había exigido su cierre antes del 31 de diciembre de 2021, a pesar de que el Secretario General de las Naciones Unidas abogaba por su continuidad y la evolución de su mandato. En su informe sobre la misión de evaluación estratégica acerca de la labor de las Naciones Unidas en Burundi, de noviembre de 2020, el Secretario General había indicado que había recibido garantías del Presidente Ndayishimiye de que su Gobierno estaba dispuesto a debatir esta cuestión⁸.

B. Otros organismos

15. En noviembre de 2020, sobre la base de las elecciones celebradas en 2020 y los compromisos asumidos por las nuevas autoridades, la Organización Internacional de la Francofonía decidió reanudar la cooperación multilateral con Burundi, suspendida desde abril de 2016.

16. El 27 de abril de 2021, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana decidió retirar a Burundi de su orden del día y poner fin al mandato de la Misión de Observadores de Derechos Humanos y Expertos Militares de la Unión Africana en Burundi el 31 de mayo de 2021.

17. En junio de 2021, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) volvió a acreditar a la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos (CNIDH) de Burundi con la categoría A. Teóricamente, la CNIDH funciona de manera independiente. Sin embargo, en su informe anual de 2020, solo informa de violaciones leves de los derechos civiles y políticos en el contexto del proceso electoral, pero no de casos de violación del derecho a la vida, secuestro o desaparición forzada, ni de vulneración de las libertades civiles. Aunque señala casos de detención arbitraria y vulneración del derecho a un juicio imparcial, y algunos casos de tortura y violencia sexual, ninguno de ellos está relacionado con el proceso electoral. Por lo tanto, la Comisión de Investigación tiene reservas sobre esas conclusiones. No obstante, señala que en abril de 2021 una delegación de la CNIDH entabló contacto con ella, lo que permitió a la Comisión y a la CNIDH intercambiar opiniones sobre sus respectivos trabajos. Espera que esta nueva acreditación anime a la CNIDH a demostrar en la práctica que es realmente independiente, en particular tratando todos los casos de violaciones, incluidos los más delicados, aún cuando lleva a cabo su misión en un espacio democrático cerrado, cosa que requiere más que nunca sea independiente y operativa.

III. Situación de los derechos humanos

18. Se siguieron cometiendo violaciones de los derechos humanos, pero a menor escala que en el contexto electoral. El espacio democrático sigue cerrado y las autoridades ejercen un férreo control sobre los medios de comunicación y la sociedad civil, a pesar de algunos gestos simbólicos aislados de apertura por parte del Presidente. Las violaciones documentadas conciernen principalmente a miembros de los partidos de la oposición y a personas sospechosas de participación en ataques armados o de colaborar con grupos armados, pero también, en menor medida, a repatriados y a la población burundesa en general. Agentes del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR), bajo la responsabilidad directa del Presidente Ndayishimiye, fueron los principales autores de ejecuciones, desapariciones

⁸ S/2020/1078, párr. 68.

forzadas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios y torturas en relación con los ataques armados, y siguen actuando con impunidad. Los agentes de policía, especialmente de la Unidad Móvil de Intervención Rápida, y los *imbonerakure* también estuvieron implicados en algunos casos de ejecución, detención y tortura.

A. Violaciones y vulneraciones de derechos en el contexto de los incidentes de seguridad

1. Aumento del número de incidentes de seguridad

19. Desde agosto de 2020, se han registrado regularmente incidentes de seguridad en Burundi, en particular, enfrentamientos armados e intercambios de disparos entre miembros de las fuerzas de seguridad, a veces apoyados por los *imbonerakure*, y grupos armados a menudo no identificados. También se ha informado de ataques a civiles, algunos muy selectivos y otros indiscriminados, por grupos armados. Por ejemplo, el 9 de mayo y el 26 de junio de 2021 se ametrallaron y quemaron vehículos y sus ocupantes en la carretera entre Gitega y Bujumbura, y el 25 de mayo de 2021 se lanzaron granadas contra la multitud en Bujumbura.

20. Las autoridades burundesas, que no han presentado sistemáticamente un relato oficial de estos incidentes, calificaron los primeros de “actos criminales”, pero desde el 25 de mayo de 2021 se refieren a “actos de terrorismo”. Han buscado legítimamente a los responsables, pero en este marco se han cometido graves violaciones de los derechos humanos.

2. Derecho a la vida⁹

21. Se han producido ejecuciones, a manos de la policía o agentes del SNR, de hombres sospechosos de pertenecer o ayudar a grupos armados implicados en incidentes de seguridad. Otros han muerto durante su detención a consecuencia de las torturas practicadas por los mismos agentes del Estado. No se ha iniciado ninguna investigación creíble sobre estos incidentes. Estos actos constituyen violaciones de la obligación de Burundi de respetar y proteger el derecho a la vida.

22. Varias personas sospechosas de estar implicadas de algún modo en incidentes de seguridad en su región, entre ellas miembros del Congreso Nacional por la Libertad (CNL), han sido víctimas de desaparición forzada. Algunas han reaparecido en la cárcel al cabo de unas semanas, a menudo tras ser torturadas por agentes del SNR. Durante ese período, las personas habían sido privadas de la protección de la ley y, por tanto, víctimas de desaparición forzada. El paradero de otras personas desaparecidas sigue siendo desconocido. La Comisión no ha podido determinar si las sospechas de las autoridades sobre la participación de estas personas en los atentados se basaban en pruebas objetivas o solo estaban relacionadas con su afiliación política o su perfil étnico. En la mayoría de los casos, las personas han sido detenidas por policías o agentes del SNR y bajo su control.

23. La Comisión también ha recibido denuncias creíbles de casos de vulneración del derecho a la vida. Hombres armados no identificados habría dado muerte intencionadamente a *imbonerakure* y a miembros del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) con responsabilidades administrativas locales y algunos de sus familiares. Al parecer, grupos de hombres armados no identificados también son responsables de ataques indiscriminados que han causado la muerte de muchos civiles. La Comisión no ha podido identificar a los autores, ya que las víctimas cercanas al partido CNDD-FDD se han mostrado reacias a cooperar con la Comisión en relación con los ataques selectivos y el Gobierno se ha negado a transmitir información sobre las investigaciones.

⁹ En los párrafos 36, 51 y 52 de este informe figuran otras vulneraciones del derecho a la vida.

3. Derecho a la libertad y a la integridad física

24. Muchas personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente a raíz de incidentes de seguridad; se las acusaba de colaborar o apoyar a los grupos armados, por ejemplo “alimentándolos”, a menudo únicamente por su afiliación política o su perfil étnico, o se las acusaba en lugar de un familiar buscado por los mismos motivos. La mayoría de estas personas han sido detenidas por el SNR y sometidas a graves torturas, incluida la tortura sexual, y a malos tratos.

B. Medios de comunicación

25. Los principales avances desde que el Presidente Ndayishimiye llegó al poder se han producido en el ámbito de los medios de comunicación. El Gobierno ha tomado medidas para aflojar el control de la prensa; más simbólicas que estructurales, estas medidas no pueden garantizar de forma efectiva y sostenible la libertad de información y expresión.

26. El 24 de diciembre de 2020, el Presidente Ndayishimiye indultó a los periodistas del Grupo de Prensa Iwacu que fueron detenidos en octubre de 2019 por haber realizado su trabajo y condenados por “intento fallido de complicidad para atentar contra la seguridad interior del Estado”. El 28 de enero de 2021, el Jefe del Estado afirmó ante los profesionales de los medios de comunicación su compromiso con una prensa libre y responsable, y pidió al Consejo Nacional de Comunicación (CNC) que encontrara soluciones para que los medios suspendidos pudieran reanudar sus actividades.

27. El 12 de febrero de 2021, la sección de comentarios de Iwacu pudo reabrirse, pero el acceso directo a su sitio web desde Burundi sigue siendo imposible. El 19 de febrero se levantaron las sanciones impuestas a Radio Bonesha y su nueva dirección se comprometió a evitar cualquier “mala conducta profesional”. El 21 de abril de 2021 se permitió la reanudación de las emisiones de cuatro medios de comunicación, entre ellos Isanganiro TV. El 16 de junio de 2021, BBC Radio, suspendida desde marzo de 2019, fue “autorizada a solicitar una nueva licencia de explotación”. Sin embargo, no se han producido avances significativos en relación con la radio Voz de América, que también está suspendida desde 2019.

28. Sin embargo, continúa la práctica de vilipendiar a los periodistas que se atreven a criticar al Gobierno o su desempeño, o a revelar casos de mala gobernanza. Los periodistas están fuertemente controlados, incluso en sus desplazamientos, por el CNC, que sigue dispuesto a sancionar cualquier “desviación” y no duda en pedir cuentas a los responsables de los medios. Los periodistas se ven obligados a autocensurarse, sobre todo por miedo a correr la misma suerte que los periodistas de Iwacu detenidos arbitrariamente, y algunos han sido objeto de intimidación o amenazas en su búsqueda de información.

29. Además, siete periodistas burundeses en el exilio fueron declarados culpables en rebeldía de atentado contra la autoridad del Estado, asesinato y destrucción en relación con el intento de golpe de Estado de 13 de mayo de 2015, y condenados a cadena perpetua. Esta decisión del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2020 no se hizo pública hasta el 2 de febrero de 2021. Cabe recordar que, en el contexto del asunto RPS 100, 34 presuntos golpistas en el exilio, entre los que se encontraban periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, rebeldes del CNDD-FDD y militares, fueron procesados y condenados sin haber podido ser representados por un abogado. Sus bienes, embargados por los tribunales en mayo de 2019, fueron vendidos en subasta en noviembre de 2020.

30. Los medios oficiales no dan prueba de un espíritu crítico y se niegan a plantear el menor cuestionamiento sobre la actuación del gobierno o a informar sobre incidentes delicados, como los cadáveres encontrados regularmente en el espacio público o los casos de violaciones de derechos.

31. El Gobierno anunció que se revisaría la ley de prensa de 2018 para regular los medios de comunicación en línea y las radios comunitarias e impedir la circulación de “contenidos contrarios a la cultura burundesa” en las redes sociales. Por lo tanto, la única medida estructural real prevista es reforzar el control del contenido de la prensa.

C. Sociedad civil

32. En general, los aspectos positivos relativos a la sociedad civil consisten en algunos gestos simbólicos especiales. El 2 de abril de 2021, la organización *Parole et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités* (PARCEM) fue autorizada a reanudar sus actividades tras haber sido suspendida en junio de 2019 por haber “empañado la imagen del país” al presentar un informe crítico sobre la situación socioeconómica de Burundi. Los defensores de los derechos humanos Nestor Nibitanga y Germain Rukuki fueron puestos en libertad el 27 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021, respectivamente, el primero en virtud de un indulto presidencial y el segundo tras su segunda apelación¹⁰.

33. Sin embargo, el Gobierno ha tomado medidas que están más orientadas a reforzar su control sobre las actividades y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil que a reabrir el espacio democrático. Las autoridades burundesas consideran que la sociedad civil solo está para ayudarlas, negando así el principio mismo de la libertad de asociación, que incluye la libertad de decidir los objetivos que se persiguen y los medios para alcanzarlos. Por ejemplo, el Gobierno ha decidido limitar los gastos de explotación de los proyectos financiados por los asociados técnicos y financieros, en particular equiparando los salarios a los de los establecimientos públicos burundeses. En febrero de 2021, el Gobierno advirtió a las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que operaban en la provincia de Bubanza que serían sometidas a inspecciones para verificar, entre otras cosas, sus logros, la composición étnica de su personal, la acreditación de los empleados expatriados y sus salarios, y la participación de los comités de contratación establecidos por el Gobierno en los procedimientos de contratación. Así pues, las autoridades están desplegando plenamente sus medios de control.

34. Además, cinco defensores de los derechos humanos, abogados y/o representantes de ONG exiliados fueron condenados en rebeldía a cadena perpetua en el asunto RPS 100 y sus bienes fueron confiscados y vendidos.

D. Partidos políticos de la oposición

35. Tras las elecciones, se redujeron las numerosas restricciones abusivas y violaciones del derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica y de la libertad de expresión que pesaban contra los partidos de la oposición, incluido el CNL, como la prohibición de celebrar mítines y reuniones o de abrir oficinas. Esto se explica lógicamente por el hecho de que el CNL mermó sus actividades después de las elecciones y ya no representa una amenaza inminente para el partido gobernante, sobre todo porque no participa en el Gobierno ni en las Mesas de la Asamblea Nacional y el Senado.

36. No obstante, se han señalado incidentes esporádicos en algunas provincias: varias oficinas del CNL han sido objeto de vandalismo, especialmente en junio de 2021. Para el CNL, sigue siendo difícil organizar reuniones, lo que en algunos municipios es imposible. Activistas del partido de la oposición fueron acosados o maltratados por *imbonerakure* en represalia por su participación política y otros fueron objeto de intimidación para obligarlos a sumarse al CNDD-FDD. Algunos han sido detenidos y encarcelados arbitrariamente en relación con sus actividades políticas, y a veces sometidos a tortura o maltrato durante su detención y reclusión, si bien ha disminuido el número de casos. Asimismo, en los meses posteriores a las elecciones ha habido víctimas de desaparición forzada entre los miembros activos del CNL; algunos fueron vistos por última vez mientras eran llevados por agentes del estatales o por *imbonerakure*. Si bien al menos una persona fue encontrada posteriormente en detención, el paradero de las otras víctimas sigue siendo desconocido.

37. El discurso de odio contra los opositores ha sido sustituido en gran medida por llamamientos oficiales a la tolerancia política, pero de vez en cuando reaparecen declaraciones que tienden a equiparar a los opositores con los “enemigos del país”. El propio Presidente Ndayishimiye se ha contradicho al respecto, reconociendo la libertad de expresión de los partidos políticos para después denunciar a los que no apoyan al Gobierno como

¹⁰ Véase también el párrafo 55 del presente informe.

“agentes de Estados extranjeros”. Así pues, parece tolerar la oposición política solo si esta acepta colaborar con su Gobierno.

38. Los diputados de la oposición que se atrevieron a cuestionar o criticar la actuación del Gobierno pagaron el precio de esta desconfianza hacia la oposición política, que parece estar muy arraigada entre los dignatarios del CNDD-FDD. Por ejemplo, el exdiputado Fabien Banciryanino, una de las pocas voces críticas del régimen del Presidente Nkurunziza, fue detenido el 2 de octubre de 2020 y procesado por rebelión, denuncia calumniosa y atentado contra la seguridad interior y exterior del Estado. El 7 de mayo de 2021 fue condenado a un año de prisión.

39. Si bien en general la violencia política ha disminuido, esto no significa que haya más tolerancia política. No se han tomado medidas estructurales para garantizar que los autores de los actos de violencia cometidos durante de las elecciones sean castigados o para evitar que estas prácticas se repitan, especialmente en futuras elecciones. Al parecer, tras las elecciones se dieron instrucciones a los *imbonerakure* para que dejaran de ejercer violencia contra los opositores, pero pueden ser movilizados en todo momento por las autoridades y el partido CNDD-FDD. Además, desde los ataques armados de la primavera de 2021, los miembros del CNL han vuelto a ser vigilados de cerca por los *imbonerakure*. Como se ha mencionado anteriormente, tras estos ataques, miembros del CNL han sido acusados de colaborar con los rebeldes o de poseer armas, aunque no está claro si esto se debe a su afiliación política o si se basa en pruebas objetivas.

E. Repatriados

40. A 30 de junio de 2021, un total de 276.275 burundeses seguían siendo oficialmente refugiados en los países vecinos y 164.990 refugiados burundeses habían sido repatriados en el marco del programa tripartito de apoyo al retorno voluntario iniciado en 2017, incluidos 42.299 desde enero de 2021¹¹. Los refugiados regresaron principalmente de Tanzania (129.535) y Rwanda (28.212), desde donde se iniciaron las actividades de repatriación en agosto de 2020¹².

41. El clima de hostilidad y desconfianza hacia los repatriados ha disminuido porque, según varios testigos, se han dado instrucciones a los funcionarios de la administración local y a los *imbonerakure* para que garanticen una mejor acogida a quienes regresan al país, cosa que reviste importancia para el retorno masivo de refugiados que desea el Gobierno. Sin embargo, en junio de 2021, la Conferencia de Obispos Católicos lamentó que los repatriados no fueran bien recibidos en algunas partes del país y que, lamentablemente, sufrieran intimidación y opresión¹³.

42. Efectivamente, entre las personas repatriadas recientemente hubo casos de maltrato, en particular por los *imbonerakure*. Algunos repatriados que habían sido políticamente activos en el pasado, fueron acusados de colaborar con grupos armados; entre ellos hubo casos de detención, reclusión arbitraria y tortura durante su detención. En ocasiones, el miedo a ser buscado, detenido o asesinado ha llevado a los refugiados a regresar a su país de acogida; es el caso de algunos que habían venido por su cuenta para hacer un reconocimiento y decidir un posible retorno en el marco del programa tripartito.

43. Persisten grandes dificultades en la reintegración socioeconómica de los repatriados ya que las condiciones de acogida siguen siendo precarias debido a la pobreza crónica del país. A raíz de la presión gubernamental para aumentar el índice de retorno, se ha superado

¹¹ Véase <https://data2.unhcr.org/en/dataviz/57?sv=13&geo=0>.

¹² Véase “Voluntary Repatriation of Burundian Refugees”, en <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87857>.

¹³ Véase www.egliscatholique.bi/index.php/fr/vie-de-l-eglise1/communiqués/communiqué-de-cloture-de-l-assemblée-plenière-de-la-conference-des-éveques-catholiques-du-burundi-du-mois-de-juin-2021.

la capacidad de absorción de las zonas de acogida. Se calcula que alrededor del 70 % de los repatriados tiene necesidades humanitarias graves y el 23 % necesidades extremas¹⁴.

44. Los repatriados se enfrentan, entre otras cosas, a la falta de medios de subsistencia, de vivienda o de tierras, a la falta de acceso a las escuelas y a los servicios sanitarios, y a problemas de seguridad, incluidos los conflictos locales en relación con la tierra y las relaciones intrafamiliares, que siguen sin resolver debido al mal funcionamiento del sistema judicial. También son víctimas de acoso, persecución y discriminación por parte de las comunidades locales u otros grupos¹⁵. Los hogares encabezados por mujeres son aún más vulnerables y se enfrentan a dificultades especiales¹⁶. En 2021, el 22 % de los repatriados consideró que la situación de seguridad en Burundi no había mejorado desde su huida¹⁷.

F. Población en general

1. Situación socioeconómica

45. La situación general de la población burundesa en cuanto al disfrute de sus derechos económicos y sociales sigue siendo preocupante. Se estima que el 84 % de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza en 2019, con una renta anual per cápita de 260 dólares de los Estados Unidos¹⁸. En 2020, los precios de los alimentos básicos como las judías, el arroz y el maíz aumentaron, en parte debido al cierre de las fronteras para combatir la pandemia de COVID-19 y a distintos desastres naturales que afectaron a las cosechas. Se calcula que en 2021, un total 2,3 millones de personas en Burundi necesitarán ayuda humanitaria, de las cuales 661.000 se encuentran en situación de extrema necesidad. La mayoría de las necesidades están relacionadas con la seguridad alimentaria (2 millones de personas) y la nutrición (704.000 personas, de las cuales el 63 % son niños), pero también con el acceso a la salud, el agua, el saneamiento, la higiene, la vivienda y la educación. Estas cifras representan un ligero aumento con respecto a 2020, año en el que 1,7 millones de personas se encontraban en situación de necesidad¹⁹.

46. Burundi es especialmente vulnerable a las catástrofes naturales. En 2020, 100.000 personas se vieron afectadas por catástrofes naturales, de las cuales 44.222 fueron desplazadas²⁰. En cuanto a la salud, el acceso a la atención sanitaria básica se ve debilitado por la precariedad financiera de la población y por una red de estructuras médicas inadecuada en cuanto a la cantidad y la variedad de la asistencia prestada²¹. El Presidente Ndayishimiye ha prometido dotar de un hospital a cada uno de los 119 municipios, pero por el momento no lo ha conseguido. Burundi tomó medidas para contener la propagación de la COVID-19 ya en el verano de 2020 y anunció a finales de julio de 2021 que finalmente autorizaría la vacunación de su población. Se ha reanudado la cooperación con la Organización Mundial de la Salud, en particular tras la llegada de su nuevo representante en abril de 2021.

47. Se calcula que en 2021, 176.000 personas (el 98 % de las cuales son mujeres) necesitarán protección, especialmente en relación con la violencia sexual y de género. Sin embargo, la mayoría de los centros de salud no cuenta con los recursos y la capacidad

¹⁴ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Burundi - Aperçu des besoins humanitaires 2021”, pág. 38. Disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2021-burundi_v10_.pdf.

¹⁵ PNUD y ACNUR, “2021 Burundi Refugee Return and Reintegration Plan”, pág. 14.

¹⁶ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Burundi - Aperçu des besoins humanitaires 2021”, pág. 74.

¹⁷ PNUD y ACNUR, “2021 Burundi Refugee Return and Reintegration Plan”, pág. 14.

¹⁸ Véanse Grupo del Banco Mundial, *Macro poverty outlook for Sub-Saharan Africa: country-by-country analysis and projections for the developing world*, disponible en <http://pubdocs.worldbank.org/en/720441492455091991/mpo-ssa.pdf>, p. 211, y Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Burundi - Humanitarian Needs Outlook 2021”, pág. 14.

¹⁹ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Burundi - Aperçu des besoins humanitaires 2021”, pág. 32.

²⁰ *Ibid.*, pág. 21; y www.unicef.org/burundi/stories/dire-straits.

²¹ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Burundi - Aperçu des besoins humanitaires 2021”, pág. 78.

necesarias para atender a las víctimas de forma adecuada y específica. Los servicios integrales de primeros auxilios no son suficientes ni fácilmente accesibles, con solo seis centros integrados en todo el país, cuya capacidad operativa se ha reducido mucho desde el fin de la financiación del Banco Mundial²². Las mujeres y las niñas que viven en situación de pobreza extrema corren un mayor riesgo de estar expuestas a la violencia sexual y a menudo adoptan estrategias de supervivencia negativas, como la prostitución, que a su vez aumentan el riesgo de violencia sexual y de género²³.

48. Según las estimaciones de los agentes humanitarios, más de 160.000 niños de entre 3 y 16 años, de los cuales 80.000 son niñas, corren el riesgo de no ser escolarizadas o de ver interrumpida su educación en 2021, debido sobre todo al alto nivel de pobreza de las familias y a una oferta educativa limitada, tanto en cuanto a las infraestructuras como al número de docentes. El entorno de aprendizaje sigue siendo desfavorable, con una media de 75 alumnos por clase (133 en Bujumbura Mairie), a lo que se agrega la falta de material didáctico, agua y electricidad. La violencia en las escuelas, incluida la violencia sexual y los embarazos no deseados, son también obstáculos específicos para la educación de las niñas. En 2020, más del 50 % de los niños de 4 a 19 años de las provincias fronterizas con Tanzania no estaban escolarizados²⁴.

2. Principales violaciones

49. A pesar de su gran pobreza, la población se ve obligada a hacer contribuciones —a menudo sin base legal— para financiar las infraestructuras públicas, contribuir al desarrollo o apoyar al partido en el poder, so pena de que se le niegue el acceso a los servicios o a los lugares públicos, o se le denieguen documentos administrativos. Se organizó una supuesta contribución “voluntaria” entre los funcionarios de al menos una provincia para financiar un partido de fútbol en memoria del Presidente Nkurunziza. También se amenazó a personas por no hacer suficientes contribuciones al CNDD-FDD.

50. Se informó de que, desde que Evariste Ndayishimiye llegó al poder, los *imbonerakure* recibieron instrucciones para dejar de ejercer la violencia contra la población y de sustituir a la policía. En efecto, el número de incidentes con participación de *imbonerakure* ha disminuido en varias provincias, excepto en las provincias fronterizas y en las que son escenario de ataques armados, donde siguen siendo movilizados por las autoridades para garantizar la seguridad, especialmente en los comités mixtos de seguridad. Por ello, continúan sus rondas nocturnas en estos lugares, ocasión que a veces aprovechan para robar a las personas con las que se cruzan. El 30 de junio de 2021, las fuerzas de defensa recibieron una orden interna por escrito para recurrir a los “movimientos políticos armados” a fin de desactivar las bandas armadas²⁵, lo que constituye un reconocimiento casi oficial de que la liga juvenil del CNDD-FDD está armada y apoya a las fuerzas de defensa.

51. En repetidas ocasiones, se han encontrado numerosos cadáveres en el espacio público, especialmente cerca de las carreteras y los cursos de agua. Las autoridades locales siguieron enterrándolos inmediatamente sin intentar identificar a los fallecidos ni investigar las causas de la muerte y los eventuales responsables, aun cuando la mayoría de los restos presentaba signos de muerte violenta. Según la Ligue Iteka, 554 personas, entre ellas 118 mujeres, fueron asesinadas durante el primer año de gobierno del Presidente Ndayishimiye; los restos de 250 de ellos fueron encontrados en el espacio público²⁶.

52. Debido a las graves deficiencias de las autoridades para hacer frente a este fenómeno, es imposible distinguir entre los casos de violaciones del derecho a la vida por parte de agentes estatales o *imbonerakure* y los casos de derecho común, como los asesinatos relacionados con disputas de tierras o familiares, o los crímenes atroces, que son frecuentes y se cometen con impunidad, especialmente cuando las víctimas pertenecen a un partido de la oposición. El comportamiento de las autoridades constituye en sí mismo una violación, ya

²² *Ibid.*, pág. 76.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, págs. 67 y 68.

²⁵ Véase el anexo V del presente informe.

²⁶ Véase https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2021/06/Lettre_au_President_Evariste_Ndayishimiye_du_18_juin_2021.pdf.

que al negarse a iniciar investigaciones creíbles e imparciales sobre esos casos incumplen su obligación de proteger el derecho a la vida y el derecho a un recurso efectivo. El persistente silencio de las autoridades ante este fenómeno puede interpretarse incluso como una aquiescencia implícita ante esas prácticas, especialmente cuando las víctimas no pertenecen al CNDD-FDD.

G. Justicia

53. No se han producido avances significativos en la lucha contra la impunidad. Las primeras condenas en el verano de 2020 no fueron realmente seguidas por otras que hubieran marcado una ruptura significativa con el pasado. Aunque algunos policías y militares fueron condenados por delitos comunes, a menudo cometidos bajo la influencia del alcohol, y algunos *imbonerakure* fueron detenidos por infracciones graves, varios fueron posteriormente liberados y/o “castigados” a nivel interno. En el caso de los que permanecen detenidos, queda por ver si los procedimientos tendrán algún resultado. Al parecer, se detuvo a agentes del SNR y a otras personas conocidas por estar implicadas en numerosas vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, la opacidad de estos procedimientos hace que no esté claro si ello está relacionado con sus acciones pasadas, con otros delitos, o si se trata más bien de un ajuste de cuentas interno.

54. Persisten las deficiencias en el funcionamiento de la justicia, en particular la corrupción, el tráfico de influencias, las injerencias de diversas autoridades y de miembros del CNDD-FDD, el incumplimiento de los procedimientos y plazos legales, la no ejecución de las decisiones judiciales, en particular las relativas a la puesta en libertad, y la inercia de ciertos procedimientos. Se sigue denegando a las víctimas un recurso efectivo y se las sigue amenazando e intimidando.

55. La falta de independencia del poder judicial viene de lejos, pero su instrumentalización con fines políticos/diplomáticos se acentuó con el Presidente Ndayishimiye, como ilustra claramente la cronología del caso Germain Rukuki. La decisión del Tribunal Supremo de anular la primera decisión de apelación que confirmaba su condena a 32 años de prisión se produjo el 30 de junio de 2020, es decir, 12 días después de la toma de posesión del Presidente Ndayishimiye. El segundo procedimiento de apelación tuvo lugar el 24 de marzo de 2021, poco después de iniciado el diálogo con la Unión Europea. La decisión del Tribunal de Apelación, que debería haberse dictado en el plazo de un mes, no se comunicó hasta el 21 de junio de 2021, unas horas después de que el embajador de la Unión Europea anunciara el inicio del procedimiento para levantar las sanciones contra Burundi.

56. No se han tomado medidas estructurales para solucionar estos problemas. Por el contrario, la revisión prevista del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) aumentará e institucionalizará la posibilidad de que el ejecutivo controle al poder judicial: el CSM, presidido por el Jefe del Estado, se encargará de controlar la calidad de los fallos judiciales y las medidas de ejecución, e incluso podrá adoptar medidas correctivas. A finales de julio de 2021, el gobernador de la provincia de Bujumbura anunció su intención de supervisar las decisiones judiciales y su ejecución. El Gobierno también tiene previsto suprimir las instituciones de lucha contra la corrupción, es decir, el Tribunal Especial y la Brigada Especial, que algunos observadores consideran un paso atrás en la lucha contra la malversación económica.

H. Bases económicas del Estado

57. En su anterior informe²⁷, la Comisión constató que la corrupción, la malversación de fondos públicos, los conflictos y la obtención ilegal de intereses sustentaban el funcionamiento de la economía burundesa, lo que privaba al Estado de Burundi de los recursos necesarios para financiar la protección y la realización de los derechos humanos.

²⁷ A/HRC/45/32.

58. Reconociendo el problema, el Presidente Ndayishimiye ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus prioridades. Sin embargo, las reformas introducidas hasta ahora han sido más bien modestas e incluso cuestionables, como el proyecto de suprimir las instituciones especializadas en la lucha contra la corrupción. Una vez más, se trata en su mayoría de gestos simbólicos, como la espectacular destitución, el 1 de mayo de 2021, del Ministro de Comercio, Transporte, Industria y Turismo, cuyas acciones corrían el riesgo de “poner en peligro la economía del país”, o el despido colectivo, en la primavera de 2021, de funcionarios acusados de malversación de fondos, sin que se haya realizado una investigación exhaustiva ni se haya iniciado una acción en justicia. El efecto disuasorio de esas decisiones no está demostrado, y las sanciones colectivas crean una sensación de arbitrariedad. En las circunstancias imperantes, y a falta de una reforma estructural creíble, la Comisión tiene motivos razonables para creer que la corrupción sigue siendo endémica en Burundi, tanto la que afecta a la población en su vida cotidiana como la corrupción en gran escala.

59. Además, el Jefe del Estado ha mostrado a veces una actitud ambigua, al tergiversar la información sobre la declaración de bienes de los funcionarios públicos, a pesar de que está prevista en la Constitución, o al declarar que solo se investigarían los casos de corrupción cometidos después de su investidura, estableciendo así una impunidad *de facto* para actos anteriores.

60. Sin embargo, ha habido novedades en el sector minero, donde la Comisión comprobó que la concesión de licencias mineras estaba condicionada al pago de grandes sumas de dinero a personas que ocupan altos cargos, y que la falta de transparencia sobre las ayudas anuales previstas para el desarrollo comunitario, unida a la ausencia de logros visibles sobre el terreno, planteaba dudas sobre la existencia de una posible malversación. El Presidente Ndayishimiye encargó una auditoría del sector minero, presumiblemente en respuesta a las acusaciones del Consejo de Seguridad Nacional de 2019 de que las empresas mineras no cumplían sus compromisos y elaboraban informes sesgados sobre su producción. El 8 de abril de 2021, el Gobierno prohibió a la empresa Rainbow Mining Burundi exportar los materiales de tierras raras que extraía en Gakara. Esta decisión se tomó a raíz de las acusaciones de que la empresa hacía declaraciones falsas sobre el contenido real de las tierras raras y los precios de venta. El 15 de abril de 2021, el Primer Ministro denunció las prácticas de las empresas mineras que “despojan al país de su riqueza natural”. El 1 de julio de 2021, el Presidente anunció que se suspenderían o rescindirían los acuerdos de concesión minera establecidos en condiciones ilícitas o que presentaban vacíos legales para garantizar que los recursos naturales contribuyeran realmente al desarrollo del país. A mediados de julio de 2021, el Gobierno suspendió las actividades de las empresas mineras, acusándolas de no haber respetado los convenios mineros. Añadió que estos últimos no eran lo suficientemente beneficiosos para Burundi y debían ser renegociados.

61. En efecto, la amenaza de rescisión unilateral de los acuerdos mineros podría llevar a acuerdos más ventajosos para el país. Sin embargo, las negociaciones deben ser totalmente transparentes para que repercutan en las prácticas corruptas. De lo contrario, esas renegociaciones pueden convertirse en una oportunidad para efectuar nuevos pagos a autoridades de alto nivel. En interés de todos los interesados, cualquier medida para combatir la corrupción o regular las actividades de las empresas mineras debe respetar el estado de derecho.

I. Estado de derecho

62. El estado de derecho se basa en tres axiomas: el Estado que actúa a través de la ley, el Estado que está sujeto a la ley y el Estado cuya legislación tiene ciertos atributos intrínsecos²⁸. A pesar de la voluntad declarada por el Presidente Ndayishimiye de promover el estado de derecho, que se ha deteriorado gravemente en los últimos años, este sigue erosionándose, ya que los procedimientos y las leyes se respetan aún menos que antes.

²⁸ J. Chevallier citado por E. David, “Conclusions générales”, en *L'État de droit en droit international*, Colloque de Bruxelles de la Société française pour le droit international, París, Pedone, 2009, págs. 435 y 436.

63. Las autoridades del más alto nivel han permitido o aceptado abiertamente la transgresión de la Constitución y las leyes. Por ejemplo, los ministros no han cumplido su obligación constitucional de declarar sus bienes. El Presidente, que en un principio insistió en que ello se hiciera rápidamente, declaró después que esas declaraciones no eran realistas ni viables, antes de anunciar el 9 de junio de 2021 que ya se podían hacer esas declaraciones con los formularios disponibles. Sin embargo, aún no se ha confirmado que los ministros hayan hecho estas declaraciones. La Constitución, basada en el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi, establece cuotas étnicas en las principales instituciones y en las fuerzas de defensa y seguridad, pero según diversas estimaciones, estas cuotas ya no se respetan, excepto en el Parlamento²⁹.

64. Otras autoridades se han excedido en sus competencias al tomar decisiones sin seguir los procedimientos legales. Por ejemplo, en febrero de 2021, el Ministerio del Interior, Desarrollo Comunitario y Seguridad Pública anunció que sustituiría a todos los recaudadores de impuestos del ayuntamiento de Bujumbura, a los que acusaba de malversación de fondos. El 9 de abril de 2021, anunció el despido colectivo e inmediato de los 119 contadores municipales acusados de complicidad con los antiguos recaudadores de impuestos. En febrero de 2021, decidió que los comercios situados cerca de los mercados públicos debían cerrar en un plazo de diez días y trasladarse al interior de los mercados, aunque la mayoría de ellos funcionaban legalmente. En julio de 2021, la Ministra de Justicia anunció el despido colectivo de los magistrados de los tribunales de residencia a raíz de las quejas de los ciudadanos. El Presidente del Senado pidió que se encarcelara a las parejas que vivían en concubinato y que se las enviara a trabajar en el campo. Las autoridades locales también aumentan los impuestos y las contribuciones de todo tipo, a menudo sin ninguna base legal.

65. Por otra parte, algunas decisiones adoptadas legalmente no se han ejecutado o aplicado en su totalidad, como el indulto presidencial concedido teóricamente a 5.200 presos en marzo de 2021, que solo empezó a aplicarse a mediados de abril. A principios de julio de 2021, solo 2.600 presos indultados habían sido realmente liberados, algunos de los cuales, según se informó, volvieron a ser detenidos poco después de su liberación y otros fueron secuestrados y desaparecieron. No se han ejecutado algunas decisiones judiciales, especialmente en relación con las decisiones de puesta en libertad provisional en espera de juicio o la puesta en libertad tras la absolución. Por ejemplo, Germain Rukuki debería haber sido puesto en libertad inmediatamente después de que se anunciara el veredicto del Tribunal de Apelación, pero solo salió de la cárcel al cabo de una semana, tras la presión de la sociedad civil, la CNIDH y la Unión Europea. Por el contrario, otras decisiones, como la destrucción de construcciones consideradas anárquicas o ilegales, se ejecutaron casi de inmediato sin ofrecer a los afectados ninguna vía de recurso o un plazo razonable.

66. El Presidente Ndayishimiye avaló directa o implícitamente estas decisiones, que se adoptaron sin base legal y sin respetar los procedimientos ni dar a los interesados la posibilidad de presentar un recurso. Estas prácticas, independientemente de los posibles méritos de las decisiones, socavan los principios del estado de derecho, la seguridad jurídica y la separación de poderes.

J. Responsabilidades

1. Responsabilidad del Estado burundés

67. El Estado burundés puede ser considerado responsable de los hechos constitutivos de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, en particular el SNR y la policía, pero también por autoridades administrativas que representan al Estado en distintos niveles.

68. Los *imbonerakure* suelen actuar solos, a veces como auxiliares o sustitutos de las fuerzas de seguridad, en presencia de agentes del Estado o con su consentimiento o a petición suya. Gozan de una gran libertad de acción conferida por las autoridades burundesas, que no obstante tienen los medios para controlarlos. Algunos poseen material y equipo reservado a los cuerpos de defensa y de seguridad, lo que demuestra el papel central que desempeñan en

²⁹ <https://ligue-iteka.bi/wp-content/uploads/2021/03/Situation-po-ethnique-26-mars-2021.pdf>.

las estructuras de seguridad oficiales y no oficiales del Estado. El Estado burundés es directamente responsable de los actos cometidos por los *imbonerakure* cuando actúan siguiendo instrucciones de agentes estatales, o en completa dependencia o control efectivo de estos. En los demás casos, al no llevar a cabo las investigaciones necesarias ni iniciar procesos judiciales efectivos, la responsabilidad en materia de protección de los derechos humanos recae en el Estado burundés³⁰.

2. Responsabilidad de los grupos armados

69. La Comisión documentó un caso reciente de vulneración del derecho a la libertad, el derecho a la seguridad y el derecho a la integridad física que afectaba a varias víctimas, entre ellas niños, cometido en territorio burundés por un grupo armado no identificado. Además, los grupos armados también son presuntamente responsables de vulneración grave del derecho a la vida en el contexto de ataques armados, pero la Comisión no ha podido reunir pruebas suficientes para corroborar el curso de los acontecimientos y posiblemente identificar a los autores, en parte debido a la negativa del Gobierno a cooperar.

IV. Delitos en virtud del derecho internacional

A. Elementos constitutivos y tipología de los delitos

70. La Comisión sigue teniendo motivos razonables para creer que en Burundi se han cometido crímenes de lesa humanidad, tal y como los define el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en línea de continuidad con los cometidos en el contexto electoral. Se trata del encarcelamiento u otras formas de privación grave de la libertad física, la tortura y la persecución por motivos políticos, principalmente de opositores políticos y algunos de sus familiares³¹.

71. Estos actos se han seguido cometiendo en diversas provincias por distintos autores con métodos de operación similares y con el objetivo de debilitar a la oposición política. Por tanto, esos incidentes pueden calificarse de “ataques sistemáticos” dirigidos deliberadamente contra civiles. Los presuntos autores de estos delitos internacionales tenían necesariamente conocimiento de ese objetivo, en particular a través de las instrucciones que recibían al respecto en distintos niveles del CNDD-FDD y las que recibían de las autoridades locales, lo que significa que necesariamente conocían el contexto en el que se inscribían sus actos.

B. Responsabilidades individuales

72. La Comisión ha actualizado su lista de presuntos autores de crímenes de lesa humanidad; la información sigue siendo confidencial a fin de proteger las fuentes y respetar la presunción de inocencia. Sin embargo, la Comisión se reserva el derecho de darla a conocer.

V. Factores de riesgo

A. Panorama

73. Desde 2019, la Comisión viene analizando los factores de riesgo de un posible deterioro de la situación de los derechos humanos en Burundi³² basándose en el Marco de Análisis sobre los Crímenes Atroces elaborado por las Naciones Unidas³³. Esta actividad se enmarca en la lógica de los principios de alerta temprana y de prevención. Sin embargo, la

³⁰ A/HRC/39/CRP.1, párrs. 229 a 237 (documento disponible en el sitio web de la Comisión).

³¹ A/HRC/36/CRP.1, párrs. 682 a 691.

³² A/HRC/42/CRP.2, párrs. 379 a 562 (disponible en el sitio web de la Comisión) y A/HRC/45/CRP.1, párrs. 743 a 769.

³³ A/70/741-S/2016/71.

existencia de estos factores de riesgo demostrados por indicadores objetivos no permite determinar la probabilidad de que se produzcan crímenes atroces. Además de la novedades mencionadas anteriormente en la sección sobre la situación de los derechos humanos, cabe señalar otras en el contexto de este análisis.

74. El Presidente Ndayishimiye reivindica plenamente el legado del Presidente Nkurunziza, sobre quien no escatima los elogios y a quien, a pesar de su muerte, se le ha conferido la condición de Guía Supremo del Patriotismo. Las autoridades burundesas siguen presentando las vulneraciones de derechos humanos cometidas desde 2015 como “malentendidos” y “divergencias” que deben quedar atrás. Así pues, consagran la impunidad de los autores y la falta de recursos para las víctimas, cerrando la puerta a cualquier reconciliación duradera. También se niegan a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y a debatir cuestiones relativas a estos. Cualquier mención de vulneración se sigue considerando un ataque con motivación política destinado a empañar la imagen del país. Las autoridades rechazan cualquier observación independiente e internacional sobre la cuestión de los derechos humanos y solo aceptan actividades de cooperación técnica. La religión y la política siguen estrechamente ligadas, y el Presidente Ndayishimiye, al igual que su predecesor, organiza numerosas oraciones de acción de gracias.

75. Sin embargo, el Presidente no ha dudado en romper con el legado de Nkurunziza en otros ámbitos, como la búsqueda de la normalización de las relaciones con Rwanda, la Unión Europea y la comunidad internacional, y el aumento de las visitas oficiales a países africanos.

76. La democracia consociativa establecida por el Acuerdo de Arusha preveía la participación de la oposición política, y los sucesivos Gobiernos del Presidente Nkurunziza incluyeron algunos ministros de la oposición. Sin embargo, las instituciones políticas actuales, desde el nivel central al local, están totalmente dominadas por el CNDD-FDD. Los servicios de la Presidencia se reorganizaron colocando ocho administraciones especializadas bajo el control directo del Presidente, entre ellas el Banco de la República de Burundi, el SNR, la Secretaría Permanente del Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaría Permanente del CSM y la Inspección General del Estado. Esta concentración de poder a favor del CNDD-FDD y del Presidente se inscribe en un espacio político y democrático cerrado, sin ningún contrapeso real. El parlamento, controlado por el CNDD-FDD, ratifica los proyectos de ley casi por unanimidad y no constituye un foro de debate ni una herramienta de control del ejecutivo.

77. El CNDD-FDD es el único espacio en el que son posibles los debates y las controversias. Es posible y probable que existan tensiones entre el ala dura, que incluye al Primer Ministro Alain-Guillaume Bunyoni y al nuevo Secretario General del partido, Révérien Ndikuriyo, y el ala más abierta, la del Presidente Ndayishimiye. Estas tensiones podrían explicar algunas de las incoherencias y los cambios de postura del Presidente y el hecho de que algunas de sus decisiones no se apliquen.

78. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha proseguido la exhumación de las fosas comunes de las víctimas de las masacres de 1972, excluyendo las de otras crisis que han marcado la historia de Burundi desde su independencia. Entre abril y junio de 2021, el Senado organizó conferencias sobre los acontecimientos de 1972, que dieron lugar a fuertes llamamientos en favor de la calificación de esas masacres como genocidio contra los hutus. El enfoque indudablemente unilateral y tendencioso de la historia del país que domina el proceso de justicia de transición acentúa el riesgo de una lectura basada en la memoria étnica y la victimización de un grupo étnico sobre el otro. Lógicamente, esas actividades han hecho resurgir las controversias en la sociedad burundesa, por lo que ha aumentado el riesgo de incitación al odio étnico. En octubre de 2020, el Gobierno realizó un censo de todos los funcionarios que incluía preguntas delicadas, por ejemplo sobre la pertenencia étnica, sin ofrecer garantías sobre la protección y el uso de los datos recogidos ni explicar su finalidad.

B. Factores de riesgo

79. El análisis de los factores de riesgo muestra que la situación en Burundi sigue mereciendo una gran vigilancia. La inestabilidad de la situación de seguridad que crea un entorno propicio para los crímenes atroces (factor de riesgo núm. 1) queda revelada en los siguientes indicadores: crisis de seguridad causada por actos de terrorismo y aumento de los incidentes de seguridad (1b); emergencia humanitaria para los burundeses dentro y fuera del país que puede ser causada, entre otras cosas, por una catástrofe natural o una epidemia (1c); tensión política causada por regímenes autocráticos o por la fuerte represión de la oposición política (1f); inestabilidad económica causada por la escasez de recursos (1g); grave crisis de la economía nacional (1h); gran pobreza de la población (1i).

80. No obstante, han desaparecido otros indicadores. Si bien la crisis política surgida del traspaso de poder no pacífico en 2015 no se ha resuelto, las elecciones de 2020 y las declaraciones destinadas a normalizar las relaciones entre Burundi y la comunidad internacional han mitigado este aspecto (1d). Asimismo, las acusaciones de fraude electoral masivo en 2020 no parecen afectar la percepción de la legitimidad del Gobierno (1d).

81. El factor de riesgo núm. 2 se refiere a la existencia de antecedentes de violaciones graves de los derechos humanos que no se han prevenido ni sancionado y, en consecuencia, generan riesgo de nuevas vulneraciones. Este factor estructural, ligado a la falta de voluntad política y a la debilidad de las instituciones para luchar contra la impunidad, sigue siendo importante: las violaciones graves de los derechos humanos pasadas y presentes (2a); la existencia de actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que han marcado la historia reciente de Burundi (2b); la existencia de una política o práctica de impunidad o tolerancia ante las violaciones graves de los derechos humanos (2c); la negativa del Gobierno a utilizar todos los medios posibles para poner fin a las violaciones graves de los derechos humanos o su renuencia a hacerlo (2d); la continuación de la asistencia a los grupos acusados de violaciones y la falta de condenas por sus actos (2e); la información tendenciosa sobre las violaciones graves de los derechos humanos o la negativa del Gobierno a reconocer la existencia de dichas violaciones (2f); la falta de un proceso de reconciliación o de justicia de transición imparcial e inclusivo (2g); la desconfianza generalizada de la población en las instituciones del Estado debido a la impunidad (2h).

82. También se mantiene el factor de riesgo núm. 3 relacionado con la debilidad de las estructuras estatales y que pone en entredicho la capacidad del Estado para prevenir o detener los crímenes atroces y para juzgarlos: la falta de recursos y de representación adecuada en las instituciones judiciales y las que se encargan de la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos (3b); la ausencia de una justicia independiente e imparcial (3c); la falta de control civil efectivo de las fuerzas de seguridad (3d); un alto grado de corrupción y mala gobernanza (3e); mecanismos internos de supervisión y rendición de cuentas que son insuficientes e ineficaces y mecanismos externos casi inexistentes o difícilmente accesibles para las víctimas (3f).

83. El factor de riesgo núm. 4 se refiere a la existencia de razones, objetivos u otros elementos que motiven el uso de la violencia contra grupos particulares. Este factor sigue presente con varios indicadores: motivaciones políticas dirigidas a consolidar el poder (4a); intereses económicos vinculados a la conservación del poder (4b); percepción de los opositores políticos como una amenaza para los intereses u objetivos del Gobierno, o considerados desleales al país (4e); pertenencia o apoyo, reales o percibidos, de ciertos grupos a la oposición armada (4f); ideología del CNDD-FDD caracterizada por su paradigma de “verdad” y por tanto de supremacía de esa identidad política sobre todas las demás (4g); instrumentalización de los agravios y los casos de impunidad del pasado con fines políticos (4h); la existencia de un trauma social causado por incidentes anteriores de violencia que no se han resuelto adecuadamente y que han generado sentimientos de pérdida, desplazamiento e injusticia y un posible deseo de venganza (4i).

84. Sigue presente el factor de riesgo núm. 5, a saber, la capacidad de los posibles autores para cometer crímenes atroces: disponibilidad de personal, armas y municiones, o de recursos financieros públicos o privados para adquirirlos (5a); capacidad para transportar y desplegar personal y para transportar y distribuir armas y municiones (5b); capacidad para motivar o

reclutar a un gran número de seguidores entre poblaciones o grupos, y disponibilidad de medios para movilizarlos (5c); cultura sólida de obediencia a la autoridad y conformidad grupal, presente en el CNDD-FDD y entre los *imbonerakure* (5d); presencia de otras fuerzas armadas o grupos armados no estatales (5e).

85. La falta de atenuantes (factor de riesgo núm. 6) persiste, a pesar de algunos gestos de las autoridades hacia los medios de comunicación, que siguen siendo insuficientes para garantizar una prensa libre e independiente. Los indicadores son: falta de una sociedad civil nacional fuerte, organizada y representativa y de medios de comunicación nacionales libres, diversos e independientes (6b); falta de acceso a los medios de comunicación internacionales (6c); cooperación limitada o incluso inexistente con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos (6g); falta de voluntad del Gobierno para dialogar, hacer concesiones y buscar el apoyo de la comunidad internacional, en particular en relación con las cuestiones de derechos humanos (6h); falta de apoyo de algunos Estados vecinos para proteger a la población burundesa que busca refugio (6j); falta de un mecanismo nacional de alerta temprana (6k).

86. La cuestión de la cooperación y la participación de Burundi con la comunidad internacional y las Naciones Unidas, así como con las ONG internacionales u otros actores internacionales o regionales (6d) y (6f) se ha vuelto compleja. Por un lado, el país ha redoblado sus esfuerzos a nivel diplomático para normalizar sus relaciones con los países de la región, las organizaciones internacionales y regionales, incluida la Unión Europea, pero al mismo tiempo se ha resistido a cualquier cooperación sobre las cuestiones políticas o relativas a los derechos humanos, por ejemplo, cerrando la Oficina del Enviado Especial de las Naciones Unidas y negándose a reabrir la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

87. El factor de riesgo núm. 7 se refiere al entorno y las circunstancias que propician la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos, incluida la instrumentalización con fines políticos de la identidad, los acontecimientos del pasado o los motivos para cometer actos de violencia. Los principales indicadores son: la injerencia en las actividades de las instituciones vitales del Estado, o los cambios en su composición o en el equilibrio de poder, como sucede en el caso de las cuotas basadas en el origen étnico (7b); la movilización de los *imbonerakure* en las zonas que son escenario de incidentes de seguridad (7e); las violaciones persistentes del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad de los opositores políticos (7h); la politización de la identidad y de los acontecimientos pasados, si bien han disminuido las declaraciones provocativas, de las campañas de propaganda o incitación al odio con una dimensión política y/o étnica (7m).

88. El factor de riesgo núm. 8 sobre los factores desencadenantes se redujo tras las elecciones de 2020. Otros indicadores también han evolucionado positivamente en este sentido: el éxito diplomático de las autoridades burundesas con la comunidad internacional, cuyas medidas ya no se perciben sistemáticamente como amenazas a la soberanía del Estado, salvo las relativas a los derechos humanos (8c); las reiteradas denuncias de fraude en las elecciones de 2020 no alteraron la legitimidad del gobierno (8d); los actos de propaganda de incitación al odio contra los opositores políticos disminuyeron oficialmente después de las elecciones (8g).

89. Sin embargo, persisten los actos graves de violencia (8e); el problema de la memoria y la conmemoración oficial de los delitos pasados o episodios traumáticos o históricos por motivos étnicos, que pueden exacerbar las tensiones entre los grupos (8k); los actos relacionados con los procesos de rendición de cuentas por crímenes atroces del pasado, que pueden percibirse como injustos (8l). También queda por ver qué se hará con el censo de todos los funcionarios y el próximo censo de la población, y los temores y críticas que suscitan debido a cuestiones relacionadas con la pertenencia étnica (8h).

VI. Conclusiones y recomendaciones

90. Tras más de un año en el poder, si bien el Presidente Ndayishimiye y su Gobierno han mejorado considerablemente las relaciones entre Burundi y la comunidad internacional, poco ha cambiado en materia de derechos humanos. Se han hecho gestos simbólicos, a veces espectaculares, pero que no pueden contribuir a una lucha sostenible contra la impunidad o la corrupción ni a la reapertura del espacio democrático. Han continuado las vulneraciones graves de los derechos humanos a manos de agentes estatales o los *imbonerakure* por instigación de las autoridades o con su consentimiento. Si bien los factores de riesgo han evolucionado, estos siguen estando presentes.

91. Por ello, la Comisión formula las siguientes recomendaciones a las autoridades de Burundi:

a) Aplicar las recomendaciones anteriores de la Comisión, en particular las relativas a las medidas prioritarias para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los delitos internacionales, luchar contra la impunidad y la malversación económica, reabrir el espacio democrático, garantizar las libertades públicas, reformar el poder judicial y controlar a los *imbonerakure*³⁴;

b) Reconocer públicamente la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas en Burundi desde abril de 2015, buscar y castigar a los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas;

c) Garantizar la seguridad, la libertad y la integridad física de los opositores políticos y sus familiares, los periodistas, los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los repatriados; velar por que no sean objeto de actos de violencia, intimidación, acoso o cualquier forma de discriminación, en particular en el ejercicio de sus libertades fundamentales;

d) Garantizar que la búsqueda de los responsables de los ataques armados se lleve a cabo en un marco de respeto de los derechos fundamentales y los procedimientos legales y sin discriminación;

e) Poner fin a la usurpación de las funciones de las fuerzas de seguridad o de la justicia por parte de los *imbonerakure*, y enjuiciar y castigar de manera ejemplar a los que estén implicados en las violaciones;

f) Establecer un mecanismo nacional para la prevención de la tortura en consonancia con las normas internacionales, que dé prioridad a la prevención de los actos de tortura cometidos por los agentes del SNR;

g) Cooperar plenamente con todos los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, también en relación con cuestiones delicadas, y permitirles llevar a cabo actividades de supervisión independientes y, en ese sentido, reabrir la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país;

h) Adoptar medidas para luchar eficazmente contra la corrupción, entre otras cosas, aplicando las recomendaciones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción³⁵;

i) Garantizar la transparencia y la buena gobernanza en la gestión de los recursos mineros;

j) Garantizar que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sea profesional, inclusiva, imparcial, objetiva, transparente, equilibrada, honesta y creíble, para que pueda contribuir de forma real y duradera a la reconciliación nacional;

³⁴ Véase el anexo III del presente informe.

³⁵ CAC/COSP/IRG/2019/CRP.17.

k) Adoptar medidas urgentes para restablecer el estado de derecho, garantizando el imperio de la ley, también en el seno del Gobierno y las instituciones públicas, y el respeto de la separación de poderes;

l) Garantizar a la población el disfrute del derecho a una vida digna³⁶ y de sus derechos económicos y sociales, en particular el derecho a un nivel de vida adecuado mediante, entre otras cosas, la formulación y ejecución de los presupuestos del Estado de manera que se aprovechen al máximo los recursos disponibles.

92. La Comisión recomienda a los grupos armados que pongan fin a la conculcación de los derechos humanos y a todos los actos de violencia contra las instituciones del Estado y la población civil.

93. El Comité formula las siguientes recomendaciones a la comunidad internacional:

a) Mantener su vigilancia sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, especialmente a través de un mecanismo internacional independiente que pueda supervisar objetivamente la situación de los derechos humanos en el país;

b) Velar por que los refugiados no se vean obligados a regresar a Burundi en el marco del programa tripartito de apoyo al retorno voluntario, en particular debido al deterioro de las condiciones de vida, y que los retornos sean voluntarios, dignos y seguros;

c) Apoyar a las organizaciones independientes de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en Burundi, incluidas las que están fuera del país para que, entre otras cosas, investiguen e informen al público sobre las vulneraciones de los derechos humanos en el país.

94. La Comisión formula las siguientes recomendaciones a los asociados técnicos y financieros de Burundi:

a) Establecer procedimientos para reducir al mínimo y eliminar el riesgo de malversación económica en el marco de los proyectos de ayuda al desarrollo;

b) Promover proyectos que tengan como objetivo mitigar los factores de riesgo de manera sostenible y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las finanzas públicas.

³⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 36 (2018), párr. 26.

II. Correspondance avec le Gouvernement du Burundi



United Nations

Nations Unies

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

OHCHR • PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIBurundi • TEL: +41 22 917 9313 • E-MAIL: coiburundi@ohchr.org

Genève, le 20 Janvier 2021

REFERENCE: 2021/COIBRD/Lettre/04

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à la résolution 45/19 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, adoptée le 6 octobre 2020, par laquelle le Conseil a décidé de proroger le mandat de la Commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi.

J'espère que la transition politique et la mise en place des nouvelles institutions à l'issue des élections de 2020 vont permettre l'instauration d'un dialogue constructif entre la Commission d'enquête et les nouvelles autorités burundaises, conformément à l'esprit de coopération voulu par le Conseil des droits de l'homme, et ainsi contribuer, à terme, à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays et à lutter contre l'impunité.

À cet égard, je note avec satisfaction la grâce présidentielle accordée le 23 décembre 2020 aux quatre journalistes d'Iwacu ainsi que la tenue de plusieurs procès à l'encontre d'auteurs de violations graves des droits de l'homme, y compris certains membres des forces de défense et de sécurité et de la ligue des jeunes du parti CNDD-FDD. Dans un souci d'impartialité et d'objectivité, la Commission d'enquête souhaiterait recevoir des informations plus détaillées sur ces récents développements, ainsi que toute information utile à la compréhension de la situation des droits de l'homme au Burundi, afin de préparer son rapport final qui sera présenté au Conseil des droits de l'homme lors de sa 48^{ème} session en septembre 2021.

Je vous adresse donc en annexe une liste de points relatifs à la situation des droits de l'homme au Burundi au sujet desquels la Commission souhaiterait obtenir des clarifications et plus d'informations. Certains d'entre eux avaient déjà fait l'objet d'une demande à votre Gouvernement dans le cadre de mes correspondances datées du 2 avril 2019 et du 4 février 2020, qui sont malheureusement restées sans réponse.

Son Excellence
Monsieur Rénovat Tabu
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
Représentant permanent de la République du Burundi
auprès de l'Office des Nations Unies
et des autres organisations internationales à Genève
Rue de Lausanne 44
1201 Genève
mission.burundi217@gmail.com



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 2

Par ailleurs, je me permets de souligner les recommandations faites par la Commission d'enquête dans son dernier rapport qui sont les plus à même d'avoir un impact direct et tangible sur la situation des droits de l'homme au Burundi, ainsi que les mesures prioritaires qu'elle a identifiées afin d'atténuer les principaux facteurs de risque à l'issue de la transition politique de 2020¹. Ce sont en effet les éléments à l'aune desquels la Commission va pouvoir examiner l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le pays :

- Libérer immédiatement les défenseurs des droits de l'homme et journalistes détenus arbitrairement, ainsi que tous les prisonniers politiques, notamment ceux des partis d'opposition arrêtés et détenus dans le contexte des élections de 2020 ;
- Garantir la sécurité, la liberté et l'intégrité physique des membres des partis d'opposition, dont le CNL, et assurer qu'ils ne fassent pas l'objet d'actes d'intimidation, de harcèlement ou de toute forme de discrimination en représailles à leur engagement politique ;
- Rétablir toutes les libertés publiques et garantir notamment la liberté de la presse et la liberté d'association de la société civile ;
- Faire cesser les violations des droits de l'homme et l'impunité dont bénéficient les auteurs ;
- Garantir la non-répétition des violations en révoquant ou en suspendant les agents de l'État soupçonnés d'être impliqués dans des violations ;
- Restreindre l'omniprésence des Imbonerakure dans la sphère publique ; faire cesser l'usurpation des fonctions des forces de sécurité ou de la justice par des Imbonerakure, et poursuivre en justice et sanctionner de manière exemplaire ceux ayant été impliqués dans des violations – sinon dissoudre cette ligue ;
- Réformer les comités mixtes de sécurité humaine afin de les rendre plus inclusifs et de limiter leurs compétences ;
- Mettre fin au recrutement des enfants par les Imbonerakure et démanteler les « aiglons » du CNDD-FDD ;
- Prendre des mesures afin de lutter efficacement contre les malversations économiques et la mauvaise gouvernance économique ;
- Reprendre la pleine coopération avec l'ONU et rouvrir le Bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ;
- Reprendre une pleine coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé ;
- Sanctionner systématiquement les propos haineux ;

¹ A/HRC/45/CRP.1, par. 770-782.



COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE BURUNDI

PAGE 3

- Garantir une approche inclusive par la Commission vérité et réconciliation, incluant les quatre piliers de la justice transitionnelle ;
- Réformer la Justice pour garantir son indépendance et son impartialité.

Je remercie par avance votre Gouvernement pour sa coopération et toutes les informations qu'il voudra bien partager avec la Commission, et entretemps je reste disponible afin d'échanger sur cette demande d'information ainsi que de manière plus générale sur le travail de la Commission

Veuillez accepter, Excellence, les assurances de ma plus haute considération.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diène".

M. Doudou Diène
Président de la Commission d'enquête sur le Burundi

III. Recommandations antérieures faites par la Commission

1. Recommandations faites en 2020

Version française

1. Vu la profondeur historique de la crise burundaise et la dimension en partie structurelle des violations des droits de l'homme, et prenant en compte le principe de la responsabilité de protéger le peuple burundais, y compris dans le cadre de la transition politique en cours au Burundi, ainsi que les mesures susceptibles d'atténuer les facteurs de risque, la Commission réitère tout d'abord ses précédentes recommandations¹, qui demeurent entièrement valables et pertinentes, particulièrement celles adressées aux autorités burundaises concernant les mesures prioritaires pour faire cesser les violations des droits de l'homme et les crimes internationaux, lutter contre l'impunité et améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment la réouverture de l'espace démocratique et la protection des libertés publiques. Ses recommandations portant sur les mesures à plus long terme relatives à la révision du cadre juridique et à la réforme du système judiciaire restent cruciales.

2. Ensuite, la Commission adresse aux autorités burundaises les recommandations suivantes:

- a. Rouvrir le bureau de pays du Haut-Commissariat aux droits de l'homme;
- b. Libérer immédiatement les défenseurs des droits de l'homme et journalistes détenus arbitrairement, ainsi que tous les prisonniers politiques, notamment ceux des partis d'opposition arrêtés et détenus dans le contexte des élections de 2020;
- c. Garantir la sécurité, la liberté et l'intégrité physique des membres des partis d'opposition, dont le CNL, et assurer qu'ils ne fassent pas l'objet d'actes d'intimidation, de harcèlement ou de toute forme de discrimination en représailles à leur engagement politique;
- d. Rétablir toutes les libertés publiques pour permettre que les futures échéances électorales soient libres, crédibles et transparentes;
- e. Faire cesser l'usurpation des fonctions des forces de sécurité ou de la justice par des Imbonerakure, et poursuivre en justice et sanctionner de manière exemplaire ceux ayant été impliqués dans des violations – sinon dissoudre cette ligue;
- f. Réformer les comités mixtes de sécurité humaine afin de les rendre plus inclusifs et de limiter leurs compétences;
- g. S'acquitter de leurs obligations spécifiques en matière de droits des femmes et de droits de l'enfant;
- h. Mettre fin au recrutement des enfants par les Imbonerakure et démanteler les « aiglons » du CNDD-FDD;
- i. Établir des services de prise en charge psychosociale pour les enfants victimes ou témoins de violations graves, particulièrement parmi les rapatriés;
- j. Garantir l'accès à la justice et à des services médicaux et psychosociaux adaptés aux victimes de violences sexuelles, y compris les victimes masculines;
- k. Instituer un quota de 30% de femmes dans les conseils collinaires;
- l. Reprendre une pleine coopération avec l'Organisation mondiale de la Santé;
- m. Prendre des mesures afin de lutter efficacement contre les malversations économiques, notamment en assurant la transparence, la concurrence et l'établissement de critères objectifs et prédéterminés pour la passation des marchés

¹ Voir ci-après.

- publics, ainsi qu'un système de recours interne efficace, et ouvrir des enquêtes sur les allégations de cas de biens mal acquis;
- n. Devenir partie à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives et mettre en œuvre les normes associées;
 - o. Publier systématiquement le budget annuel exécuté;
 - p. Garantir que les hauts responsables politiques et administratifs procèdent systématiquement à une déclaration publique de leur patrimoine à leur prise de fonction et à la fin de leur mandat.
3. Aux groupes rebelles d'opposition, la Commission recommande de s'abstenir de tout acte violent.
4. À la communauté internationale, conformément à son devoir de vigilance, la Commission adresse les recommandations suivantes:
- a. Maintenir un mécanisme international indépendant qui puisse suivre objectivement la situation des droits de l'homme au Burundi, y compris au moyen des facteurs de risque et de la mise en œuvre des recommandations de la Commission;
 - b. Baser la reprise de la coopération internationale avec le Burundi et la levée des sanctions sur des progrès tangibles en matière de droits de l'homme et de lutte contre l'impunité et la corruption;
 - c. S'assurer que les réfugiés ne soient pas forcés à rentrer au Burundi tant que les conditions dans le pays ne sont pas propices, et demander un accès libre aux rapatriés pour évaluer leur situation;
 - d. Soutenir les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme au Burundi, notamment pour faire des enquêtes et des rapports publics.
5. Aux États et aux organisations internationales qui financent des programmes d'aide internationale au développement, la Commission recommande de renforcer leurs procédures pour minimiser les risques de détournement de fonds et d'ouvrir systématiquement des enquêtes sur les allégations reçues à ce sujet, afin de s'assurer que ladite assistance est entièrement utilisée pour les objectifs prévus et au profit des bénéficiaires envisagés.
6. Au système des Nations Unies, y compris à ses agences, la Commission adresse les recommandations suivantes:
- a. Conformément à la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, fournir un appui uniquement lorsqu'il y a des garanties que ceux qui sont appelés à en bénéficier ne sont pas des auteurs de violations graves des droits de l'homme, sur le plan individuel ou institutionnel, et ne pas fournir un tel appui lorsqu'il y a eu des allégations crédibles à cet égard ou lorsque les autorités compétentes ne prennent pas les mesures de correction ou d'atténuation nécessaires;
 - b. Renforcer l'appui à la réponse aux violences sexuelles ou fondées sur le genre pour mieux prendre en compte les besoins spécifiques des victimes, y compris parmi les réfugiés.

Version anglaise

1. In view of the historical depth of the Burundian crisis and the partly structural dimension of human rights violations, and taking into account the principle of the responsibility to protect the people of Burundi, including in the context of the political transition under way in the country, as well as the measures likely to mitigate risk factors, the Commission first reiterates its previous recommendations.² Those recommendations remain entirely valid and relevant, particularly those addressed to the Burundian authorities concerning measures to be given priority in order to put an end to human rights violations and international crimes, to combat impunity and to improve the human rights situation in the country, including the reopening of the democratic space and the protection of civil

² See hereinbelow.

liberties. Its recommendations for longer-term measures relating to the review of the legal framework and the reform of the judiciary remain crucial.

2. The Commission also makes the following recommendations to the Burundian authorities:

- a. To reopen the country office of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;
- b. To immediately release human rights defenders and journalists who have been arbitrarily detained, as well as all political prisoners, including those from opposition parties arrested and detained in the context of the 2020 elections;
- c. To guarantee the safety, freedom and physical integrity of members of opposition parties, including the Congrès national pour la liberté, and to ensure that they are not subjected to intimidation, harassment or any form of discrimination as a reprisal for their political activities;
- d. To restore all civil liberties to enable future elections to be free, credible and transparent;
- e. To stop the Imbonerakure from usurping the functions of the security forces and the judiciary and to prosecute and punish, as an example, those who have been involved in violations, or alternatively to dissolve the Imbonerakure;
- f. To reform the Joint Human Security Committees to make them more inclusive and to limit the scope of their competence;
- g. To fulfil the specific obligations of the authorities with regard to women's rights and the rights of the child;
- h. To put an end to the recruitment of children by the Imbonerakure and to disband the CNDD-FDD party's "Little Eagles";
- i. To establish psychosocial care services for child victims and witnesses of serious human rights violations, particularly among returnees;
- j. To ensure access to justice and appropriate medical and psychosocial services for victims of sexual violence, including male victims;
- k. To establish a 30 per cent quota for women on hill district councils;
- l. To resume full cooperation with the World Health Organization;
- m. To take measures to effectively combat economic misfeasance, in particular by ensuring transparency, competition and the establishment of objective and pre-established criteria for the awarding of government contracts, as well as an effective system of domestic remedies, and to investigate allegations of cases of ill-gotten gains;
- n. To become a party to the Extractive Industries Transparency Initiative and to implement the related standards;
- o. To systematically publish the annual budget, as implemented;
- p. To ensure that senior political and administrative officials systematically make a public declaration of their assets upon taking office and at the end of their term.

3. The Commission recommends that opposition rebel groups refrain from violence.

4. For the international community, in keeping with its duty of vigilance, the Commission has the following recommendations:

- a. To maintain an independent international mechanism that can objectively monitor the human rights situation in Burundi, including through the monitoring of risk factors and the implementation of the Commission's recommendations;
- b. To base the resumption of international cooperation with Burundi and the lifting of sanctions on tangible progress in the area of human rights and the fight against impunity and corruption;

- c. To ensure that refugees are not forced to return to Burundi until conditions in the country are favourable and to request free access to returnees to assess their situation;
 - d. To support civil society organizations active in the field of human rights in Burundi, in particular for investigations and public reporting.
5. The Commission recommends that States and international organizations funding international development assistance programmes strengthen their procedures to minimize the risk of misappropriation of funds and systematically investigate allegations that they receive in order to ensure that such assistance is fully utilized for the intended purposes and to the benefit of the intended beneficiaries.
6. To the United Nations system, including its agencies, the Commission makes the following recommendations:
- a. In accordance with the human rights due diligence policy, to provide support only when there are guarantees that those who are to benefit from it are not perpetrators of serious human rights violations, either individually or institutionally, and not to provide such support when there have been credible allegations in this regard or when the competent authorities fail to take the necessary corrective or mitigating measures;
 - b. To strengthen support for the response to sexual and gender-based violence in order to better address the specific needs of victims, including among refugees.

2. Recommandations faites en 2019

Version française

1. La tenue des élections de 2020 est un facteur de risque important. Afin qu'elles puissent se dérouler dans un climat apaisé tout en étant justes, libres, transparentes et crédibles, la Commission adresse aux autorités burundaises les recommandations suivantes:
- a. Mettre en œuvre toutes les recommandations précédentes de la Commission³, qui restent plus que jamais valables et pertinentes, notamment celles concernant les mesures prioritaires afin de faire cesser les violations des droits de l'homme et les crimes internationaux, de lutter contre l'impunité, et d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays, ainsi que celles à moyen et plus long termes relatives à la révision du cadre juridique et à la réforme du système judiciaire;
 - b. Diligenter sans délai des enquêtes indépendantes et effectives sur les cas de violations documentés par la Commission depuis 2015, afin de permettre l'instauration d'un climat de confiance et de tolérance politique encourageant une participation inclusive dans le processus électoral;
 - c. Se réengager de manière constructive et coopérative auprès de tous les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, en leur permettant d'assurer pleinement et librement leurs mandats de suivi des droits de l'homme;
 - d. Assurer l'indépendance structurelle et financière des mécanismes nationaux des droits de l'homme et renforcer la capacité de leurs membres;
 - e. Prendre les mesures nécessaires afin de garantir la liberté d'établissement, d'organisation et de fonctionnement des ONG étrangères et nationales, y compris en révisant les lois qui les régissent;
 - f. Prendre les mesures nécessaires afin de garantir la liberté d'information dans le pays et le droit des médias locaux et internationaux d'exercer leurs activités conformément aux normes internationales, y compris en révisant les lois sur la presse et le Conseil national de la communication;

³ Voir annexe III (A/HRC/36/54 et Corr.1, par. 85 à 94 ; et A/HRC/39/63, par. 85 et 86).

- g. Garantir la jouissance effective des libertés publiques, notamment les libertés d'opinion, d'expression, d'accès à l'information, d'association, d'assemblée et de religion, y compris en mettant fin à toute pratique de recrutement forcé au sein du parti au pouvoir et de sa ligue des jeunes;
 - h. Appliquer les Lignes directrices sur l'accès à l'information et les élections en Afrique et les Lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
 - i. Garantir que tous les partis politiques peuvent mener leurs activités légitimes en toute liberté et sécurité, dans un climat de tolérance politique, notamment en sanctionnant tout propos d'incitation à la haine et à la violence contre les autres partis politiques et leurs membres;
 - j. Garantir, dans la pratique, notamment en révisant le Code électoral, le droit à prendre part à la gestion des affaires publiques sans discrimination;
 - k. Garantir, dans la pratique, l'indépendance structurelle de la Commission électorale nationale indépendante, notamment en révisant le décret la régissant afin que sa composition soit inclusive et équilibrée, et renforcer les capacités de ses membres aux échelons municipal et provincial;
 - l. Permettre l'accès d'observateurs électoraux indépendants, internationaux et régionaux, et leur garantir, ainsi qu'aux observateurs nationaux issus de la société civile ou des partis politiques, une liberté de mouvement et d'action avant, pendant et après les élections;
 - m. Appliquer les Directives pour les missions d'observation et de suivi des élections de l'Union africaine;
 - n. Permettre aux opposants politiques de rentrer d'exil afin de participer aux élections de 2020, et garantir leur liberté et leur sécurité, notamment en annulant les mandats d'arrêt contre ceux qui n'ont pas utilisé ou prôné la violence;
 - o. Libérer immédiatement tous les prisonniers politiques arrêtés et détenus en lien avec l'exercice de leurs droits démocratiques;
 - p. Renforcer la formation des forces de maintien de l'ordre, afin d'éviter les mauvais traitements et d'assurer une gestion pacifique des foules;
 - q. Appliquer les Lignes directrices pour le maintien de l'ordre par les agents chargés de l'application des lois lors des réunions en Afrique, et le manuel de formation y relatif, élaborés par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
 - r. Mettre fin à l'impunité des Imbonerakure en exerçant un contrôle sur eux, afin d'éviter l'usurpation des fonctions des forces de sécurité ou de la justice et de faire cesser leurs activités répressives et démonstrations de force sur les collines;
 - s. Mettre fin à toutes les contributions illégales.
2. À tous les partis politiques burundais, qu'ils participent ou non aux élections, la Commission recommande de s'abstenir de tout acte violent et de toute incitation à la haine et à la violence, notamment dans le contexte des élections de 2020.
3. Aux groupes rebelles d'opposition, la Commission recommande de s'abstenir de tout acte violent et de toute incitation à la haine et à la violence.
4. À la communauté internationale, y compris l'Union africaine et le système des Nations Unies, la Commission adresse les recommandations suivante:
- a. Renouveler le mandat de la présente Commission pour une année supplémentaire;
 - b. Continuer à suivre l'évolution de la situation des droits de l'homme au Burundi dans le contexte des élections de 2020 et, conformément aux principes de prévention et d'alerte précoce, faire régulièrement l'évaluation des risques, afin de permettre, en cas de détérioration, que soient développées et mises en œuvre des stratégies de réponse adaptées;

- c. Mettre tout en œuvre pour assurer la tenue d'un dialogue interburundais inclusif afin de régler la crise politique;
 - d. Soutenir le renforcement des capacités des observateurs électoraux internationaux, régionaux et nationaux;
 - e. Envoyer des observateurs régionaux ou internationaux uniquement si leur liberté d'action est garantie dans la pratique;
 - f. S'assurer que l'aide humanitaire parvient intégralement à la population;
 - g. Répondre à l'appel de financement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en faveur des réfugiés burundais;
 - h. S'assurer que le suivi des rapatriés se fait dans la durée, de manière plus fréquente et transparente.
5. Plus particulièrement, la Commission recommande au système des Nations Unies, conformément à l'initiative Les droits de l'homme avant tout, d'intensifier la promotion des droits de l'homme relevant des mandats propres aux agences et programmes concernés, de même que la collecte et la publication de données objectives et fiables sur la situation au Burundi.
6. Aux États membres du Conseil de sécurité, la Commission recommande de maintenir le Burundi dans le programme de travail du Conseil, au regard des facteurs de risque identifiés, et d'inviter la Commission à lui rendre compte de ses conclusions.

Version anglaise

1. The 2020 elections pose a major risk. To ensure that they are peaceful, fair, free, transparent and credible, the Commission makes the following recommendations to the Burundian authorities:
- a. Give effect to all the Commission's previous recommendations, which are more well-founded and relevant than ever, including those concerning priority measures to end human rights violations and international crimes, combat impunity and improve the human rights situation in the country and the medium- and longer-term recommendations on reforms to the legal framework and the judicial system;⁴
 - b. Conduct prompt, independent and effective investigations into the cases of violations documented by the Commission since 2015 with a view to creating a climate of trust and political tolerance conducive to inclusive participation in the electoral process;
 - c. Re-engage constructively and cooperatively with all international and regional human rights mechanisms and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, enabling them to carry out their human rights monitoring mandates fully and freely;
 - d. Ensure that national human rights mechanisms are institutionally and financially independent and build the capacity of their members;
 - e. Take the measures necessary to ensure that foreign and domestic NGOs can be freely established and organized and that they can operate freely, including by amending the laws regulating them;
 - f. Take the measures necessary to ensure freedom of information in the country and the right of local and international media to operate in accordance with international standards, including by amending the laws on the press and the National Communication Council;
 - g. Guarantee the effective enjoyment of civil liberties, including the freedoms of opinion, expression, access to information, association, assembly and religion, not least by ending all forced recruitment to the ruling party and its youth league;

⁴ See annex III (A/HRC/36/54 and Corr.1, paras. 85–94, and A/HRC/39/63, paras. 85–86).

- h. Follow the Guidelines on Access to Information and Elections in Africa and the Guidelines on Freedom of Association and Assembly of the African Commission on Human and Peoples' Rights;
 - i. Ensure that all political parties can engage in legitimate activities in complete freedom and security, in an environment of political tolerance, including by punishing any incitement to hatred and calls for violence against other political parties and their members;
 - j. Ensure, in practice, the right to participate in the conduct of public affairs without discrimination, in particular by amending the Electoral Code;
 - k. Ensure, in practice, the institutional independence of the Independent National Electoral Commission, including by amending the decree governing it to make certain that its composition is inclusive and balanced, and strengthen the capacity of its members at the municipal and provincial levels;
 - l. Provide access to independent international and regional election observers and ensure that they and national observers from civil society or political parties enjoy freedom of movement and action before, during and after the elections;
 - m. Follow the Guidelines for African Union Electoral Observation and Monitoring Missions;
 - n. Allow political opponents to return from exile to participate in the 2020 elections and guarantee their freedom and security, including by revoking warrants for the arrest of those who have not used or advocated violence;
 - o. Immediately release all political prisoners arrested and detained in connection with the exercise of their democratic rights;
 - p. Make the training provided to law enforcement agencies more robust to avoid ill-treatment and ensure the peaceful control of crowds;
 - q. Follow the Guidelines for the Policing of Assemblies by Law Enforcement Officials in Africa and the related training manual, both developed by the African Commission on Human and Peoples' Rights;
 - r. End the impunity of the *Imbonerakure* by exercising control over them so as to ensure that the functions of the security forces or the judiciary are not usurped and put an end to their repressive activities and shows of force in the hills;
 - s. End all illegal contributions.
2. The Commission recommends that, whether they participate in the elections or not, all political parties in Burundi refrain from violence and incitement to hatred or violence, particularly against the backdrop of the 2020 elections.
 3. The Commission recommends that opposition rebel groups refrain from violence and incitement to hatred or violence.
 4. For the international community, including the African Union and the United Nations system, the Commission has the following recommendations:
 - a. Renew the mandate of the Commission for an additional year;
 - b. Continue to monitor developments in the human rights situation in Burundi in the context of the 2020 elections and, in accordance with the principles of prevention and early warning, carry out regular risk assessments to enable the development and use of appropriate response strategies in the event of deterioration;
 - c. Make every effort to ensure that an inclusive inter-Burundi dialogue is held to resolve the political crisis;
 - d. Support capacity-building for international, regional and national election observers;
 - e. Send regional or international observers only if their freedom of action is guaranteed in practice;

- f. Ensure that all humanitarian aid reaches the population;
 - g. Respond to the appeal made by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees for funds for Burundi refugees;
 - h. Ensure that returnees are monitored in a sustained and more regular and transparent manner.
5. In particular, the Commission recommends that the United Nations system, in accordance with the initiative Human Rights Up Front, take stronger measures to promote human rights, under the mandates of the relevant agencies and programmes, and to collect and publish objective and reliable data on the situation in Burundi.
6. In view of the risk factors that have been identified, the Commission recommends that the States members of the Security Council keep Burundi on the Council's programme of work and that the Council invite the Commission to report to it on its conclusions.

3. Recommandations faites en 2018

Version française

1. La Commission recommande au Gouvernement burundais, comme mesures prioritaires:
- a. De mettre immédiatement un terme aux violations graves des droits de l'homme commises par des agents de l'État et des Imbonerakure;
 - b. D'établir, avec le soutien de la communauté internationale, des mécanismes ad hoc chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de poursuivre les auteurs de crimes de droit international qui ne font pas l'objet d'une enquête par la Cour pénale internationale;
 - c. D'établir, avec le soutien de la communauté internationale, une entité indépendante chargée de faire la lumière sur les cas de disparition signalés depuis avril 2015, de localiser les possibles fosses communes, d'exhumer et d'identifier les corps;
 - d. De prendre des mesures pour que les victimes de torture et les femmes ayant subi des violences sexuelles aient accès à des soins appropriés, en particulier un libre accès à tous les soins de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à un soutien psychologique;
 - e. D'appliquer les Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
 - f. De contrôler les hausses des prix, en particulier en revoyant l'augmentation des taxes et des impôts qui porte atteinte au droit à un niveau de vie suffisant de la population, et en supprimant les contributions qui touchent disproportionnellement les personnes les plus pauvres;
 - g. De coopérer avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, notamment:
 - i) En accueillant à nouveau des missions de procédures spéciales;
 - ii) En mettant en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel, des organes conventionnels et des procédures spéciales, notamment en établissant un mécanisme national d'élaboration des rapports et de suivi;
 - h. D'autoriser le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à reprendre sans entrave l'ensemble de ses activités au Burundi;
 - i. De signer et de mettre en œuvre le mémorandum d'entente avec l'Union africaine et de permettre le déploiement complet des 100 observateurs des droits de l'homme.

2. La Commission recommande également au Gouvernement burundais, à moyen et plus long termes:

- a. De réviser la loi organique du 8 mars 2018 portant révision de la loi no 01/03 du 24 janvier 2013 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication afin de garantir l'indépendance de ce dernier;
- b. De ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;
- c. De réviser les dispositions du Code de procédure pénale pour les mettre en conformité avec les normes internationales, en particulier les dispositions relatives aux délais de garde à vue et de contrôle de la détention, aux perquisitions de nuit et sans mandat, à la procédure de « flagrance », à l'infraction d'« atteinte à la sûreté intérieure de l'État », et à celles accordant une impunité de jure aux magistrats et aux officiers de police judiciaire;
- d. De mettre fin aux détentions arbitraires et d'améliorer les conditions de détention:
 - En appliquant les Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
 - En garantissant le contrôle de la légalité des détentions et leur conformité avec les droits de l'homme.
- e. Faute d'un système judiciaire indépendant et performant, de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale dans l'enquête qu'elle a ouverte le 25 octobre 2017;
- f. D'engager une réforme en profondeur du système judiciaire afin de garantir son indépendance, son impartialité et son effectivité, notamment:
 - i) En appliquant les Directives et les Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;
 - ii) En publiant les conclusions des états généraux de la justice de 2013 et en réunissant les acteurs du secteur et les partenaires internationaux pour discuter des mesures de suivi;
 - iii) En augmentant le budget du secteur de la justice et en garantissant son autonomie de gestion;
 - iv) En revalorisant la rémunération des magistrats des juridictions ordinaires ainsi que les moyens et l'équipement à leur disposition;
 - v) En informatisant les greffes;
 - vi) En revoyant la composition du Conseil supérieur de la magistrature afin que ses membres soient en majorité désignés par leurs pairs;
 - vii) En revoyant les procédures de nomination, d'affectation, de notation et d'avancement des magistrats afin qu'elles ne dépendent pas du pouvoir exécutif;
 - viii) En veillant au respect strict du principe d'inamovibilité des magistrats du siège;
 - ix) En protégeant et en garantissant l'indépendance du système judiciaire en interdisant toute ingérence dans le fonctionnement de la justice par des autorités gouvernementales, des membres du parti au pouvoir ou par des membres des corps de défense et de sécurité, et en prenant des sanctions contre ceux qui influencent, ou cherchent à influencer, le fonctionnement de la justice;
 - x) En développant des programmes d'aide juridictionnelle pour les plus vulnérables;

- xi) En renforçant les mécanismes de protection de victimes et de témoins, ainsi que leur efficacité, pour restaurer la confiance de la population et pour encourager les témoins à s'exprimer sans crainte pour leur sécurité.
- g. De mettre en place, en consultation avec les bénéficiaires, un programme de réparations des victimes des violations des droits de l'homme qui comprenne des réparations matérielles, symboliques, individuelles et collectives, et qui ne soit pas dépendant de la condamnation des auteurs;
 - h. D'établir le fond étatique pour les victimes de torture prévu par la loi et en conformité avec l'Observation générale no 4 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 5);
 - i. D'établir un fond pour l'indemnisation des victimes de détention arbitraire et illégale;
 - j. De réformer le secteur de la sécurité:
 - i) En s'assurant que des éléments extérieurs n'accomplissent pas des activités de défense ou de sécurité;
 - ii) En délimitant clairement les rôles des différents corps de défense et de sécurité, en particulier du SNR;
 - iii) En suspendant les membres des corps de défense et de sécurité suspectés d'être impliqués dans des violations des droits de l'homme jusqu'au terme des enquêtes et des procédures judiciaires;
 - iv) En établissant des procédures strictes et transparentes de sélection qui intègrent des mécanismes de vérification des antécédents;
 - v) En renforçant le contrôle civil et démocratique des corps de défense et de sécurité, en particulier du SNR.
 - k. De s'acquitter de ses obligations internationales de respecter, de protéger et de garantir les droits économiques et sociaux:
 - i) En élaborant et en mettant en œuvre les budgets de l'État de manière à utiliser au maximum les ressources disponibles pour assurer le respect des droits de l'homme à la population appauvrie par la crise politique, en particulier des droits à l'alimentation, à l'eau et à la santé, et pour développer des indicateurs désagrégés, y compris par genre, pour mieux informer ses politiques;
 - ii) En entreprenant, en consultation avec les populations travaillant dans le secteur agricole, notamment les femmes, des réformes visant une meilleure protection des droits des femmes et une meilleure utilisation des terres pour l'agriculture, et en développant des perspectives de travail en dehors du secteur agricole;
 - iii) En utilisant une approche fondée sur les droits de l'homme pour régler les conflits fonciers dont ceux touchant les personnes ayant fui le Burundi avant et après 2015;
 - iv) En mettant fin à toute considération politique dans les processus de recrutement au sein de l'administration publique, des sociétés publiques et des sociétés mixtes.
3. La Commission recommande aux partis politiques et aux groupes armés d'opposition de s'abstenir de toute attaque sur le territoire burundais et de tout discours appelant à la violence, et de s'engager dans la recherche d'une solution durable à la crise politique.
 4. La Commission recommande à l'Union africaine de donner une place importante, dans sa recherche d'une solution durable à la crise au Burundi, au respect des droits de l'homme et au rejet de l'impunité, tels que prévus par son Acte constitutif.

5. La Commission recommande aux partenaires techniques et financiers du Burundi:
 - a. De suspendre ou de maintenir la suspension de toute aide budgétaire directe au Gouvernement en l'absence de priorisation des ressources internes en faveur des objectifs de développement durable et des droits économiques et sociaux de la population, et de mesures effectives contre la corruption;
 - b. De cibler les dons et les financements attribués au Gouvernement sur des projets en faveur des besoins de la population et de s'assurer que ceux-ci sont gérés efficacement et de manière transparente;
 - c. D'évaluer régulièrement l'impact des sanctions financières sur la population burundaise.
6. La Commission recommande aux garants de l'Accord d'Arusha, en leur qualité d'acteurs engagés en faveur d'une paix durable au Burundi, de continuer à chercher une solution pérenne à la crise politique et des droits de l'homme qui préserve et garantit les acquis de l'Accord d'Arusha.

Version anglaise

1. The Commission recommends that the Government of Burundi take the following measures as a matter of priority:
 - a. Put an immediate end to the gross human rights violations being committed by agents of the State and Imbonerakure;
 - b. With the support of the international community, establish ad hoc mechanisms with a mandate to investigate human rights violations and to prosecute perpetrators of international crimes that are not being investigated by the International Criminal Court;
 - c. With the support of the international community, establish an independent body with a mandate to investigate the cases of disappearance reported since April 2015, locate potential mass graves, and exhume and identify the remains;
 - d. Take measures to ensure that victims of torture and women survivors of sexual violence have access to appropriate care, including free access to all sexual and reproductive health services and to psychological support;
 - e. Implement the Guidelines on Combating Sexual Violence and its Consequences in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights;
 - f. Control price increases, in particular by reviewing duty and tax increases that are undermining the population's right to an adequate standard of living and by abolishing contributions that disproportionately affect the poorest sectors;
 - g. Cooperate with international human rights mechanisms, in particular by:
 - i) Resuming the practice of allowing special procedures mandate holders to conduct missions to Burundi;
 - ii) Implementing the recommendations of the universal periodic review, treaty bodies and special procedures, including by establishing a national mechanism for reporting and follow-up.
 - h. Authorize the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to resume all its activities in Burundi without hindrance;
 - i) Sign and implement the memorandum of understanding with the African Union and permit the full deployment of the 100 human rights observers provided for therein.

2. For the medium and longer terms, the Commission also recommends that the Government of Burundi:

- a. Amend the Organization Act of 8 March 2018 amending Act No. 01/03 of 24 January 2013 on the mandate, composition, organization and functioning of the National Communication Council with a view to ensuring the latter's independence;
- b. Ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance;
- c. Amend the Code of Criminal Procedure to align its provisions with international standards, in particular the provisions on time limits for police custody and on oversight of detention, night-time and warrantless searches, the *flagrante delicto* procedure and the offence of "undermining the internal security of the State", and provisions that grant de jure impunity to judges and to officers of the criminal investigation police (*police judiciaire*);
- d. Put an end to arbitrary detention and improve conditions of detention by:
 - i) Implementing the Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-Trial Detention in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights;
 - ii) Ensuring that detention is subject to oversight measures for assessing its legality and compatibility with human rights.
- e. In the absence of an independent and efficient judicial system, cooperate fully with the International Criminal Court in the investigation opened on 25 October 2017;
- f. Undertake an in-depth reform of the judicial system to ensure its independence, impartiality and effectiveness, including by:
 - i) Implementing the Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights;
 - ii) Publishing the conclusions of the national forum on the justice system held in 2013 and convening a meeting of justice-sector stakeholders and international partners to discuss follow-up action;
 - iii) Increasing the budget for the justice sector and ensuring that it is managed autonomously;
 - iv) Raising the pay levels of judges in the ordinary courts and increasing the resources and facilities available to them;
 - v) Computerizing court registries;
 - vi) Reviewing the composition of the Judicial Service Commission to ensure that the majority of its members are appointed by their peers;
 - vii) Reviewing procedures for the appointment, assignment, evaluation and promotion of judges to ensure that such procedures are not dependent on the executive branch;
 - viii) Ensuring strict observance of the principle that judges should have security of tenure;
 - ix) Protecting and safeguarding the independence of the judiciary by prohibiting any interference in the administration of justice by government authorities, members of the ruling party or members of the defence and security forces, and imposing penalties on anyone who influences or seeks to influence the administration of justice;
 - x) Developing legal aid programmes for persons belonging to the most vulnerable groups;

- xi) Strengthening victim and witness protection mechanisms and improving their effectiveness in order to restore public trust and encourage witnesses to come forward without fear for their safety.
- g. In consultation with the beneficiaries, establish a reparations programme for victims of human rights violations, ensuring that material, symbolic, individual and collective reparations are made available regardless of whether or not the perpetrators are convicted;
- h. Establish the State fund for victims of torture provided for by law, in conformity with general comment No. 4 on the African Charter on Human and Peoples' Rights, adopted by the African Commission on Human and Peoples' Rights, concerning the right to redress for victims of torture and other cruel, inhuman or degrading punishment or treatment (art. 5);
- i. Establish a compensation fund for victims of arbitrary and unlawful detention;
- j. Reform the security sector by:
 - i) Ensuring that outsiders are not involved in defence or security activities;
 - ii) Clearly defining the roles of the various defence and security forces, in particular the National Intelligence Service;
 - iii) Suspending members of the defence and security forces who are suspected of involvement in human rights violations until the relevant investigations and judicial proceedings have concluded;
 - iv) Establishing rigorous and transparent selection procedures that include vetting mechanisms;
 - v) Strengthening democratic civilian control over the defence and security forces, in particular the National Intelligence Service.
- k. Meet its international obligations to respect, protect and fulfil economic and social rights by:
 - i) Developing and implementing State budgets in such a way as to maximize the use of available resources to ensure that the human rights of the sectors impoverished by the political crisis are respected, in particular the rights to food, water and health care, and to develop indicators disaggregated by factors such as gender in order to better inform its policies;
 - ii) In consultation with population groups working in the agricultural sector, including women, undertaking reforms with the aim of better protecting women's rights and making better use of land for agriculture, and developing employment opportunities outside the agricultural sector;
 - iii) Taking a rights-based approach to the settlement of land conflicts, including those involving persons who fled Burundi either before or after 2015;
 - iv) Ending the inclusion of any political considerations in hiring processes for the civil service, State enterprises and public-private enterprises.
- 3. The Commission recommends that political parties and armed opposition groups refrain from engaging in any attacks on Burundian territory and from any speech calling for violence, and that they join the effort to find a lasting solution to the political crisis.
- 4. The Commission recommends that the African Union, in its efforts to find a lasting solution to the crisis in Burundi, give priority to respect for human rights and the rejection of impunity, as provided for in its Constitutive Act.
- 5. The Commission recommends that the technical and financial partners of Burundi:
 - a. Suspend, or maintain the suspension of, any direct budget support to the Government until such time as priority is given to the allocation of domestic resources for the fulfilment of the Sustainable Development Goals and the economic

and social rights of the population, and effective measures are taken against corruption;

- b. Ensure that grants and financing provided to the Government are earmarked for projects to meet the population's needs, and ensure that such funding is managed effectively and transparently;
- c. Regularly evaluate the impact of financial sanctions on the people of Burundi.

6. The Commission recommends that the guarantors of the Arusha Agreement, in their capacity as committed proponents of a lasting peace in Burundi, continue to seek a durable solution to the political and human rights crisis that will preserve and safeguard the achievements of the Arusha Agreement.

4. Recommandations faites en 2017

Version française

1. Aux autorités burundaises

1. De mettre immédiatement un terme aux violations graves des droits de l'homme commises par des agents de l'État et des Imbonerakure sur lesquels l'État exerce un contrôle;
2. D'enquêter sur ces violations et s'assurer que les auteurs présumés soient jugés dans les meilleurs délais, dans des procédures crédibles, indépendantes et équitables, et que les victimes obtiennent une juste réparation. Dans le cas où les auteurs présumés sont des agents de l'État, les suspendre jusqu'au terme de l'enquête et de la procédure judiciaire;
3. De prendre des mesures concrètes pour une amélioration rapide de la situation des droits de l'homme, notamment en:
 - Annulant les mandats d'arrêt contre des dirigeants de médias, d'organisations de la société civile et de partis politiques qui n'ont pas utilisé ou prôné la violence, et permettant leur retour en toute sécurité au Burundi;
 - Levant la suspension et la radiation des médias et organisations de la société civile, leur permettant de reprendre leurs activités en toute indépendance, et revoyant les lois adoptées en 2017 sur les organisations non-gouvernementales burundaises et internationales;
 - Libérant immédiatement tous les prisonniers politiques;
 - S'assurant que toute personne arrêtée soit détenue dans un lieu de détention officiel et que des observateurs nationaux et internationaux soient autorisés à leur rendre visite;
 - Veillant à ce que les officiers de police judiciaire ne soient pas habilités à mener des perquisitions sans mandat et de nuit comme envisagé dans les projets d'amendement du Code pénal et du Code de procédure pénale;
 - S'assurant que des individus qui n'y sont pas légalement habilités, en particulier des Imbonerakure, ne conduisent pas des activités de maintien de l'ordre ou n'y prennent pas part, y compris dans des lieux de détention, et qu'ils ne portent pas des uniformes militaires ou de police ou ne soient pas en possession d'armes;
 - Poursuivant les auteurs de discours haineux ou appelant à la violence;
 - Mettant fin aux menaces, intimidations et actes d'extorsion par des agents de l'État et des Imbonerakure;
 - Permettant aux victimes de violences sexuelles et de torture d'avoir accès à des services médicaux et psychosociaux.
4. D'engager une réforme en profondeur du système judiciaire, notamment en:
 - Publiant les conclusions des états généraux de la justice qui se sont tenus en 2013 à Gitega;

- Revoyant la composition du Conseil national de la magistrature afin que ses membres soient en majorité désignés par leurs pairs;
 - Revoyant les procédures de nomination, d'affectation, de notation et d'avancement des magistrats afin qu'elles ne dépendent pas du pouvoir exécutif;
 - Veillant au respect strict du principe d'inamovibilité des magistrats du siège;
 - Protégeant et garantissant l'indépendance du système judiciaire en interdisant toute ingérence dans le fonctionnement de la justice par des autorités gouvernementales, des membres du parti au pouvoir ou des membres des corps de défense et de sécurité, et en prenant des sanctions contre ceux qui influencent, ou cherchent à influencer, le fonctionnement de la justice;
 - Développant des programmes d'aide juridictionnelle pour les plus vulnérables;
 - Renforçant les mécanismes de protection de victimes et de témoins, ainsi que leur efficacité, pour restaurer la confiance de la population et encourager les témoins à s'exprimer sans crainte pour leur sécurité.
5. De s'assurer que les membres des corps de défense et de sécurité respectent les droits de l'homme en toutes circonstances et servent les intérêts de la population dans son ensemble et pas uniquement ceux du parti au pouvoir, notamment en:
- Renforçant le contrôle civil des corps de défense et de sécurité et l'indépendance des organes chargés de ce contrôle créés par la Constitution, en particulier le Parlement, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et l'Ombudsman;
 - Remédiant à la carence constitutionnelle de contrôle civil du SNR;
 - Prenant des mesures pour vérifier les antécédents, notamment en matière de droits de l'homme, des agents des corps de défense et de sécurité et intégrant ces mesures à une refonte des procédures de recrutement et d'avancement de ces agents.
6. De revenir sur sa décision de se retirer du Statut de Rome et coopérer pleinement avec la CPI dans la procédure d'examen préliminaire en cours et, si une enquête est ouverte, poursuivre cette coopération et assurer la protection des victimes et témoins;
7. D'autoriser le HCDH à reprendre ses activités de documentation des violations des droits de l'homme au Burundi, suspendues depuis octobre 2016;
8. De signer et mettre en œuvre le mémorandum d'entente avec l'Union africaine et permettre le déploiement complet des 100 observateurs des droits de l'homme et des 100 experts militaires, décidé en 2016;
9. De coopérer avec les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies en accueillant à nouveau des missions des procédures spéciales et en mettant en œuvre les recommandations récentes des organes de traité;
10. De s'engager activement dans la voie d'une résolution durable de la crise politique, notamment dans le cadre d'initiatives de dialogue engagées au niveau international.
2. *Aux partis politiques et groupes armés d'opposition*
11. De mettre immédiatement un terme aux atteintes aux droits de l'homme et aux actes de violence commis par leurs membres;
12. De s'abstenir de tout discours appelant à la violence et s'engager dans la recherche d'une solution durable à la crise politique au Burundi.
3. *Au Conseil des droits de l'homme*
13. De prolonger le mandat de la Commission pour une durée d'un an aux fins d'approfondir et de poursuivre ses enquêtes en raison de la persistance des violations graves des droits de l'homme et des atteintes à ceux-ci et en l'absence d'autres mécanismes spécifiques en mesure de mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur la situation des droits de l'homme au Burundi;

14. De demander au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de faire un rapport sur l'évolution de sa coopération avec le Gouvernement du Burundi aux prochaines sessions du Conseil.
4. *À la Cour pénale internationale*
 15. D'ouvrir dans les plus brefs délais une enquête sur les crimes commis au Burundi au vu des conclusions contenues dans le présent rapport et d'autres informations à sa disposition.
5. *Au Conseil de sécurité des Nations Unies*
 16. De prendre dûment compte des présentes conclusions de la Commission et de la persistance de violations graves des droits de l'homme dans toute discussion sur le Burundi et, dans ce contexte, veiller à la mise en œuvre effective de la résolution 2303 (2016);
 17. De saisir la CPI de tout crime de droit international qui serait commis au Burundi après le 27 octobre 2017;
 18. De prendre des sanctions individuelles contre les principaux auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme et de crimes de droit international au Burundi.
6. *Au Secrétaire-général des Nations Unies*
 19. De veiller à ce que le respect des droits de l'homme et la restauration de l'État de droit soient parmi les priorités de son Envoyé spécial sur le Burundi;
 20. De veiller à ce qu'aucun auteur présumé de violations des droits de l'homme ou de crimes de droit international au Burundi ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix des Nations Unies.
7. *Aux États membres des Nations Unies*
 21. D'accorder *prima facie* le statut de réfugié aux demandeurs d'asile burundais et veiller au respect strict du principe de non-refoulement, ainsi qu'à la protection des réfugiés;
 22. De poursuivre, au titre de la compétence universelle, les auteurs présumés de crimes de droit international commis au Burundi se trouvant sur leur territoire;
 23. De maintenir, en l'absence de toute amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays, les sanctions individuelles et la suspension de l'aide directe au Gouvernement burundais;
 24. De fournir une assistance technique aux autorités burundaises, dans la mesure où ces dernières font preuve d'une véritable volonté politique, afin de mener des enquêtes crédibles et indépendantes, notamment en matière d'autopsie, d'exhumation et d'identification des corps;
 25. De soutenir la mise en place de services médicaux et psychosociaux spécialisés, notamment pour les victimes de torture et de violences sexuelles;
 26. De soutenir les autorités burundaises, si celles-ci font preuve d'une véritable volonté politique, dans tout effort de réforme du système judiciaire et du secteur de sécurité qu'elles voudront engager aux fins d'améliorer la situation des droits de l'homme.
8. *À l'Union africaine*
 27. De reprendre l'initiative dans la recherche d'une solution durable à la crise au Burundi fondée sur le respect des droits de l'homme et le rejet de l'impunité, tels que prévus par son Acte constitutif, et s'y engager activement;
 28. De veiller à ce qu'aucun agent de l'État burundais accusé de violations des droits de l'homme ou de crimes de droit international ne soit recruté dans des missions de maintien de la paix de l'Union africaine;
 29. De s'assurer que l'équipe complète de ses observateurs des droits de l'homme et experts militaires soit rapidement déployée au Burundi;

30. D'envisager, en cas de persistance de la situation actuelle au Burundi, l'application de l'article 4 (h) de son Acte constitutif, autorisant l'Union africaine à intervenir dans un État membre dans certaines circonstances, notamment en cas de crimes contre l'humanité.

9. *À la Communauté des États d'Afrique de l'Est*

31. De s'assurer que l'amélioration rapide de la situation des droits de l'homme soit une priorité dans ses efforts de médiation.

10. *Aux garants de l'Accords d'Arusha de 2000, en leur qualité d'acteurs engagés en faveur d'une paix durable au Burundi*

32. De se réunir le plus rapidement possible en vue de trouver une solution pérenne à la crise politique et des droits de l'homme au Burundi.

Version anglaise

1. *The Burundian authorities should:*

1. Put an immediate end to the gross human rights violations being committed by agents of the State and Imbonerakure over which the State exercises control;
2. Investigate these violations, ensure that the alleged perpetrators are prosecuted promptly in accordance with credible, independent and fair procedures, and that the victims obtain just reparation, and, where the alleged perpetrators are agents of the State, suspend them from their duties pending the completion of the investigation and the judicial proceedings;
3. Take practical measures to bring about a rapid improvement of the human rights situation, in particular by:
 - Withdrawing the warrants for the arrest of heads of media outlets, civil society organizations and political parties who have neither used nor advocated violence, and permitting their safe return to Burundi;
 - Lifting the suspension and reversing the revocation of the licences of media and civil society organizations, permitting them to resume their activities with complete independence and reviewing the laws adopted in 2017 concerning non-profit organizations and foreign non-governmental organizations;
 - Immediately releasing all political prisoners;
 - Ensuring that every person arrested is detained in an official place of detention and that national and international observers are allowed to visit them;
 - Ensure that criminal investigation officers (officiers de police judiciaire) are not authorized to conduct searches without a warrant, including at night, as envisaged in the draft amendments to the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure;
 - Ensuring that individuals lacking legal authorization, particularly the Imbonerakure, do not perform or participate in law enforcement activities, including in places of detention, and do not wear military or police uniforms or possess weapons;
 - Prosecuting individuals who incite hatred or violence;
 - Putting an end to threats, intimidation and acts of extortion by State officials and the Imbonerakure;
 - Giving victims of sexual violence and torture access to medical and psychosocial services.
4. Undertake a thorough reform of the judiciary, in particular by:
 - Publishing the conclusions of the General Convention on the Judiciary (États généraux de la justice) held in Gitega in 2013;
 - Reviewing the composition of the Superior Council of Magistrates (Conseil supérieur de la magistrature) so that the majority of its members are designated by their peers;

- Reviewing the nomination, posting, evaluation and promotion procedures of magistrates so that they do not depend of the executive;
 - Ensuring the respect of the principle of security of tenure for judges;
 - Protecting and guaranteeing the independence of the judiciary by prohibiting all interference in their functions by governmental authorities, members of the ruling party or security and defence forces, and imposing sanctions on those who influence, or seek to influence, the functioning of the judiciary;
 - Developing legal aid programmes for the most vulnerable;
 - Reinforcing the protection mechanisms for victims and witnesses, as well as their efficiency, in order to restore people's confidence in the system and to encourage witnesses to testify without fear for their security.
5. Ensure that members of the defence and security forces respect human rights in all circumstances and serve the interests of the population as a whole, not solely those of the ruling party, in particular by:
- Reinforcing civilian control over the military and the independence of the competent organs created by the Constitution to supervise this control, in particular the Parliament, the National Human Rights Commission and the Ombudsman;
 - Implementing civilian control over the National Intelligence Service (Service national de renseignement) in line with the Constitution;
 - Conducting background checks, in particular on human rights, on defense and security forces and incorporating these measures into reforms of the recruitment and career progression of these agents.
6. Reconsider their decision to withdraw from the Rome Statute, cooperate fully with the International Criminal Court in the ongoing preliminary examination and, if an investigation is initiated, continue that cooperation, inter alia by ensuring the protection of victims and witnesses;
7. Authorize the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to resume its documentation of human rights violations in Burundi, which has been suspended since October 2016;
8. Sign and implement the memorandum of understanding with the African Union and permit the full deployment of 100 human rights observers and 100 military experts that was decided upon in 2016;
9. Cooperate with United Nations human rights mechanisms by once again receiving special procedures missions and implementing the recent recommendations of treaty bodies;
10. Actively seek a lasting solution to the political crisis, inter alia through international initiatives to promote dialogue.
2. *Political parties and armed opposition groups should:*
- 11. Put an immediate end to human rights abuses and acts of violence committed by their members;
 - 12. Refrain from any incitement of violence and participate in the quest for a lasting solution to the political crisis in Burundi.
3. *The Human Rights Council should:*
- 13. Extend the Commission's mandate for a period of one year to enable it to conduct further and more thorough investigations in view of the persistence of gross human rights violations and abuses and the absence of other specific mechanisms capable of undertaking independent and thorough investigations into the human rights situation in Burundi;
 - 14. Request the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to report, at the forthcoming sessions of the Council, on the development of its cooperation with the Burundian Government.

4. *The International Criminal Court should:*

15. Initiate, as soon as possible, an investigation into the crimes committed in Burundi in light of the conclusions contained in the present report and other information at its disposal.

5. *The United Nations Security Council should:*

16. Take due account of the Commission's conclusions, as well as persistence of gross violations of human rights, in any discussion on Burundi and, in this context, ensure the effective implementation of resolution 2303 (2016);

17. Refer to the International Criminal Court any international crime that might be committed in Burundi after 27 October 2017;

18. Impose individual sanctions against the principal alleged perpetrators of gross human rights violations and international crimes in Burundi.

6. *The Secretary-General of the United Nations should:*

19. Ensure that respect for human rights and restoration of the rule of law are among the priorities of his Special Envoy for Burundi;

20. Ensure that no alleged perpetrator of human rights violations or international crimes in Burundi is recruited for United Nations peacekeeping missions.

7. *The States Members of the United Nations should:*

21. Grant prima facie refugee status to Burundian asylum seekers and ensure strict respect for the principle of non-refoulement and refugee protection;

22. Prosecute, in accordance with the principle of universal jurisdiction, alleged perpetrators of international crimes committed in Burundi who are found to be in their territory;

23. Maintain, in the absence of any improvement in the human rights situation in Burundi, the individual sanctions and the suspension of direct aid to the Government;

24. Provide technical assistance inter alia in respect to autopsies, exhumations and identification of bodies, to enable the Burundian to conduct credible and independent investigations;

25. Support the establishment of specialized medical and psychosocial services, especially for victims of torture and sexual violence;

26. Support Burundian authorities in any judicial and security sector reform endeavors that they might wish to undertake in order to improve the human rights situation.

8. *The African Union should:*

27. Retake the lead in seeking a lasting solution to the crisis in Burundi based on respect for human rights and rejection of impunity, as provided for in its Constitutive Act, and play an active role in that process;

28. Ensure that no agent of the Burundian State who is accused of human rights violations or international crimes is recruited for African Union peacekeeping missions;

29. Ensure that the full complement of African Union human rights observers and military experts is deployed rapidly in Burundi;

30. Consider, in the event that the current situation in Burundi persists, the application of Article 4 (h) of the Constitutive Act of the African Union, under which it is authorized to intervene in a member State in certain circumstances, particularly in the event of crimes against humanity.

9. *The East African Community should:*

31. Ensure that a rapid improvement of the human rights situation is a priority in its mediation efforts.

10. *The guarantors of the 2000 Arusha Agreement, in their capacity as committed proponents of a lasting peace in Burundi, should:*
 32. Meet with a view to finding a lasting solution to the political and human rights crisis in Burundi.

IV. Indicateurs des facteurs de risque communs identifiés dans le Cadre d'analyse des atrocités criminelles (A/70/741–S/2016/71)

Version française

Facteur de risque 1. Situations de conflit armé ou autres formes d'instabilité

- a. Conflit armé international ou non international;
- b. Crise sécuritaire provoquée, entre autres, par la dénonciation d'accords de paix, un conflit armé dans les pays voisins, des menaces d'interventions étrangères ou des actes de terrorisme;
- c. Crise ou urgence humanitaire, pouvant être causée notamment par une catastrophe naturelle ou une épidémie;
- d. Instabilité politique provoquée par un changement de régime ou un transfert de pouvoir soudain ou irrégulier;
- e. Instabilité politique provoquée par des luttes de pouvoir ou la montée en puissance de mouvements d'opposition nationalistes, armés ou radicaux;
- f. Tension politique provoquée par des régimes autocratiques ou une lourde répression politique;
- g. Instabilité économique provoquée par une pénurie de ressources ou des différends concernant leur utilisation ou leur exploitation;
- h. Instabilité économique provoquée par une crise grave de l'économie nationale;
- i. Instabilité économique provoquée par la misère, un chômage de masse ou de profondes inégalités horizontales;
- j. Instabilité sociale provoquée par une résistance à l'autorité de l'État ou à ses politiques ou par des protestations de masse contre celles-ci;
- k. Instabilité sociale provoquée par l'exclusion ou des tensions fondées sur des questions d'identité, leur perception ou leurs formes extrémistes.

Facteur de risque 2. Antécédents de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire

- a. Restrictions ou violations graves, passées ou actuelles, des droits consacrés par le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, surtout si elles sont caractérisées par un comportement systématique observé préalablement et si elles visent des groupes, populations ou personnes protégés;
- b. Actes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou incitation à les commettre, survenus dans le passé;
- c. Politique ou pratique d'impunité ou de tolérance à l'égard de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, d'atrocités criminelles ou de l'incitation à les commettre;
- d. Inaction, réticence à utiliser ou refus d'utiliser tous les moyens possibles pour faire cesser des violations graves prévues, prévisibles ou persistantes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ou des atrocités criminelles probables, ou incitation à les commettre;
- e. Maintien d'une aide à des groupes accusés de participer à des violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment des atrocités criminelles, ou non-condamnation de leurs actes;

- f. Justification de violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ou d'atrocités criminelles, rapports partiels les concernant ou refus de les reconnaître;
- g. Absence de processus de réconciliation ou de justice transitionnelle après un conflit, ou politisation de ce processus;
- h. Méfiance généralisée envers les institutions de l'État ou entre différents groupes en raison de l'impunité.

Facteur de risque 3. Faiblesse des structures de l'État

- a. Cadre juridique national n'offrant pas une protection suffisante et efficace, notamment par la ratification et l'incorporation dans le droit interne des instruments relatifs au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire;
- b. Manque de ressources au sein des institutions nationales, en particulier les institutions judiciaires et celles chargées de l'application des lois et de la protection des droits de l'homme, et manque de représentation adéquate ou de formation;
- c. Absence de justice indépendante et impartiale;
- d. Absence de contrôle civil efficace des forces de sécurité;
- e. Niveaux élevés de corruption ou mauvaise gouvernance;
- f. Absence ou insuffisance de mécanismes externes ou internes de contrôle et de responsabilité, notamment que les victimes peuvent saisir pour demander réparation;
- g. Manque de sensibilisation et de formation des forces militaires, des forces irrégulières, des groupes armés non étatiques et des autres acteurs concernés au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire;
- h. Manque de capacité de vérifier que les moyens et méthodes de guerre sont conformes aux normes du droit international humanitaire;
- i. Manque de moyens pour la réforme ou le renforcement des institutions, notamment par une aide régionale ou internationale;
- j. Ressources insuffisantes pour mettre en œuvre des mesures globales de protection des populations.

Facteur de risque 4. Motivations ou incitations

- a. Motivations politiques, en particulier celles visant l'acquisition ou la consolidation du pouvoir;
- b. Intérêts économiques, notamment ceux fondés sur la préservation et le bien-être des élites ou de groupes d'identité, ou sur le contrôle de la répartition des ressources;
- c. Intérêts stratégiques ou militaires, notamment ceux fondés sur la protection ou la saisie de territoires et de ressources;
- d. Autres intérêts, notamment ceux visant à rendre une zone homogène dans son identité;
- e. Menaces réelles ou perçues comme telles de groupes, populations ou personnes protégés contre les intérêts ou les objectifs des auteurs d'actes criminels, notamment l'impression de déloyauté envers une cause;
- f. Appartenance ou adhésion réelle ou perçue comme telle de groupes, populations ou personnes protégés à des groupes d'opposition armés;
- g. Idéologies fondées sur la suprématie d'une certaine identité ou sur des versions extrémistes de l'identité;
- h. Politisation de griefs, de tensions ou de cas d'impunité issus du passé;

- i. Traumatisme social provoqué par des situations de violence passées auxquelles il n'a pas été donné de suite satisfaisante et qui ont engendré des sentiments de perte, de déplacement et d'injustice et un désir possible de revanche.

Facteur de risque 5. Capacité de commettre des atrocités criminelles

- a. Disponibilité de personnel et d'armes et munitions ou de moyens financiers publics ou privés permettant de les acquérir;
- b. Capacité de transporter et déployer du personnel et de transporter et distribuer des armes et des munitions;
- c. Capacité d'encourager ou de recruter de nombreux partisans au sein de populations ou de groupes et disponibilité de moyens pour les mobiliser;
- d. Solide culture d'obéissance à l'autorité et de conformité au groupe;
- e. Présence d'autres forces armées ou de groupes armés non étatiques ou existence de liens avec de tels forces ou groupes;
- f. Présence d'acteurs commerciaux ou d'entreprises pouvant jouer un rôle déterminant en fournissant des biens, des services ou d'autres formes d'appui pratique ou technique contribuant à soutenir les auteurs;
- g. Appui financier, politique ou autre d'acteurs nationaux influents ou riches;
- h. Appui armé, financier, logistique ou autre, notamment sous la forme d'entraînement, fourni par des acteurs extérieurs, notamment des États, des organisations internationales ou régionales ou des entreprises privées.

Facteur de risque 6. Absence de facteurs atténuants

- a. Insuffisance ou absence de processus d'autonomisation, de ressources, d'alliés ou d'autres éléments qui pourraient contribuer à la capacité des groupes, populations ou personnes protégés de se protéger eux-mêmes;
- b. Absence de société civile nationale solide, organisée et représentative et de médias nationaux libres, diversifiés et indépendants;
- c. Absence d'intérêt et d'attention des acteurs de la société civile internationale ou d'accès aux médias internationaux;
- d. Absence ou présence limitée des Nations Unies, d'organisations non gouvernementales internationales ou d'autres acteurs internationaux ou régionaux dans le pays ayant accès aux populations;
- e. Absence d'adhésion ou de participation effective de l'État à des organisations internationales ou régionales établissant des obligations afférentes au statut de membre;
- f. Manque de contact, d'ouverture ou de relations politiques ou économiques avec d'autres États ou organisations;
- g. Coopération limitée de l'État avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme;
- h. Manque de volonté des parties à un conflit d'engager un dialogue, de faire des concessions et de solliciter l'appui de la communauté internationale, ou absence d'incitations à le faire;
- i. Réticence ou échec des États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou des organisations internationales ou régionales à aider un État à assumer sa responsabilité de protéger ses populations contre les atrocités criminelles, ou à agir lorsque l'État n'assume manifestement pas cette responsabilité, ou indifférence à cet égard;

- j. Manque de soutien des États voisins pour ce qui est de protéger les populations à risque en quête de refuge: fermeture des frontières, rapatriement forcé ou restrictions en matière d'aide;
- k. Absence de mécanisme d'alerte rapide permettant de prévenir des atrocités criminelles.

Facteur de risque 7. Circonstances propices ou action préparatoire restreignant les droits fondamentaux

- a. Imposition de l'état d'urgence ou de mesures de sécurité extraordinaires restreignant les droits fondamentaux;
- b. Suspension d'institutions vitales de l'État ou ingérence dans ces institutions, ou mesures provoquant des modifications de leur composition ou l'équilibre des pouvoirs, en particulier s'il en résulte l'exclusion ou une sous-représentation de groupes protégés;
- c. Renforcement de l'appareil de sécurité, réorganisation ou mobilisation de celui-ci contre des groupes, populations ou personnes protégés;
- d. Acquisition de grandes quantités d'armes et de munitions ou d'autres objets pouvant être utilisés pour causer des dommages;
- e. Création de milices ou de groupes paramilitaires, ou intensification de l'appui à de tels milices ou groupes;
- f. Imposition d'un contrôle strict sur l'utilisation des moyens de communication ou interdiction d'y avoir accès;
- g. Expulsion ou refus d'autoriser la présence d'organisations non gouvernementales, d'organisations internationales, de médias ou d'autres acteurs pertinents ou imposition de lourdes restrictions à leurs services et déplacements;
- h. Augmentation du nombre de violations du droit à la vie, de l'intégrité physique, de la liberté ou de la sécurité de membres de groupes, populations ou personnes protégés, ou adoption récente de mesures ou de lois qui leur portent atteinte ou constituent une discrimination délibérée envers eux;
- i. Augmentation du nombre d'actes de violence graves contre les femmes et les enfants ou création de conditions facilitant la commission d'agressions sexuelles contre eux, notamment comme instrument de terreur;
- j. Imposition de conditions de vie délétères ou déportation, appréhension, regroupement, ségrégation, évacuation, déplacement ou transfert forcés de groupes, populations ou individus protégés vers des camps, des zones rurales, des ghettos ou d'autres lieux désignés;
- k. Destruction ou pillage de biens ou d'installations essentiels à des groupes, populations ou personnes protégés, ou de biens liés à l'identité culturelle et religieuse;
- l. Marquage de personnes ou de leurs biens au motif de leur appartenance à un groupe;
- m. Politisation accrue de l'identité, d'événements du passé ou de motifs de se livrer à la violence;
- n. Augmentation du nombre de déclarations provocatrices, de campagnes de propagande ou d'incitations à la haine visant des groupes, populations ou personnes protégés.

Facteur de risque 8. Facteurs déclencheurs

- a. Déploiement soudain de forces de sécurité ou déclenchement d'hostilités armées;
- b. Débordement de conflits armés ou graves tensions dans les pays voisins;

- c. Mesures prises par la communauté internationale, perçues par un État comme menaçant sa souveraineté;
- d. Changements de régime, transferts de pouvoir ou modifications du pouvoir politique des groupes, survenant soudainement ou irrégulièrement;
- e. Atteintes à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté ou à la sécurité de dirigeants, de personnalités éminentes ou de membres de groupes opposés; autres actes de violence graves, notamment attentats terroristes;
- f. Manifestations religieuses ou actes réels ou perçus comme tels d'intolérance religieuse ou d'irrespect, notamment en dehors des frontières nationales;
- g. Actes d'incitation ou propagande haineuse visant des groupes ou des personnes particulières;
- h. Recensement, élections, activités essentielles liées à ces processus ou mesures qui les déstabilisent;
- i. Changements soudains affectant l'économie ou la population active, résultant notamment de crises financières, de catastrophes naturelles ou d'épidémies;
- j. Découverte de ressources naturelles ou lancement de projets d'exploitation ayant de graves incidences sur les moyens de subsistance et la viabilité de groupes ou de populations civiles;
- k. Commémoration de crimes du passé ou d'épisodes traumatiques ou historiques pouvant exacerber les tensions entre groupes, notamment la glorification d'auteurs d'atrocités;
- l. Actes liés aux processus d'établissement des responsabilités, en particulier s'ils sont perçus comme injustes.

Version anglaise

Risk factor 1. Situations of armed conflict or other forms of instability

- a. International or non-international armed conflict;
- b. Security crisis caused by, among other factors, defection from peace agreements, armed conflict in neighboring countries, threats of external interventions or acts of terrorism;
- c. Humanitarian crisis or emergency, including those caused by natural disasters or epidemics;
- d. Political instability caused by abrupt or irregular regime change or transfer of power;
- e. Political instability caused by disputes over power or growing nationalist, armed or radical opposition movements;
- f. Political tension caused by autocratic regimes or severe political repression;
- g. Economic instability caused by scarcity of resources or disputes over their use or exploitation;
- h. Economic instability caused by severe crisis in the national economy;
- i. Economic instability caused by acute poverty, mass unemployment or deep horizontal inequalities;
- j. Social instability caused by resistance to, or mass protests against, State authority or policies;
- k. Social instability caused by exclusion or tensions based on identity issues, their perception or extremist forms.

Risk factor 2. Record of serious violations of international human rights and humanitarian law

- a. Past or present serious restrictions to or violations of international human rights and humanitarian law, particularly if assuming an early pattern of conduct and if targeting protected groups, populations or individuals;
- b. Past acts of genocide, crimes against humanity, war crimes or their incitement;
- c. Policy or practice of impunity for or tolerance of serious violations of international human rights and humanitarian law, of atrocity crimes, or of their incitement;
- d. Inaction, reluctance or refusal to use all possible means to stop planned, predictable or ongoing serious violations of international human rights and humanitarian law or likely atrocity crimes, or their incitement;
- e. Continuation of support to groups accused of involvement in serious violations of international human rights and humanitarian law, including atrocity crimes, or failure to condemn their actions;
- f. Justification, biased accounts or denial of serious violations of international human rights and humanitarian law or atrocity crimes;
- g. Politicization or absence of reconciliation or transitional justice processes following conflict;
- h. Widespread.

Risk factor 3. Weakness of State structures

- a. National legal framework that does not offer ample and effective protection, including through ratification and domestication of relevant international human rights and humanitarian law treaties;
- b. National institutions, particularly judicial, law enforcement and human rights institutions that lack sufficient resources, adequate representation or training;
- c. Lack of an independent and impartial judiciary;
- d. Lack of effective civilian control of security forces;
- e. High levels of corruption or poor governance;
- f. Absence or inadequate external or internal mechanisms of oversight and accountability, including those where victims can seek recourse for their claims;
- g. Lack of awareness of and training on international human rights and humanitarian law to military forces, irregular forces and non-State armed groups, or other relevant actors;
- h. Lack of capacity to ensure that means and methods of warfare comply with international humanitarian law standards;
- i. Lack of resources for reform or institution-building, including through regional or international support;
- j. Insufficient resources to implement overall measures aimed at protecting populations.

Risk factor 4. Motives or incentives

- a. Political motives, particularly those aimed at the attainment or consolidation of power;
- b. Economic interests, including those based on the safeguard and well-being of elites or identity groups, or control over the distribution of resources;
- c. Strategic or military interests, including those based on protection or seizure of territory and resources;

- d. Other interests, including those aimed at rendering an area homogeneous in its identity;
- e. Real or perceived threats posed by protected groups, populations or individuals against interests or objectives of perpetrators, including perceptions of disloyalty to a cause;
- f. Real or perceived membership of or support for armed opposition groups by protected groups, populations or individuals;
- g. Ideologies based on the supremacy of a certain identity or on extremist versions of identity;
- h. Politicization of past grievances, tensions or impunity;
- i. Social trauma caused by past incidents of violence not adequately addressed and that produced feelings of loss, displacement, injustice and a possible desire for revenge.

Risk factor 5. Capacity to commit atrocity crimes

- a. Availability of personnel and of arms and ammunition, or of the financial resources, public or private, for their procurement;
- b. Capacity to transport and deploy personnel and to transport and distribute arms and ammunition;
- c. Capacity to encourage or recruit large numbers of supporters from populations or groups, and availability of the means to mobilize them;
- d. Strong culture of obedience to authority and group conformity;
- e. Presence of or links with other armed forces or with non-State armed groups;
- f. Presence of commercial actors or companies that can serve as enablers by providing goods, services, or other forms of practical or technical support that help to sustain perpetrators;
- g. Financial, political or other support of influential or wealthy national actors;
- h. Armed, financial, logistic, training or other support of external actors, including States, international or regional organizations, private companies, or others.

Risk factor 6. Absence of mitigating factors

- a. Limited or lack of empowerment processes, resources, allies or other elements that could contribute to the ability of protected groups, populations or individuals to protect themselves;
- b. Lack of a strong, organized and representative national civil society and of a free, diverse and independent national media;
- c. Lack of interest and focus of international civil society actors or of access to international media;
- d. Lack of, or limited presence of, the United Nations, international non-governmental organizations or other international or regional actors in the country and with access to populations;
- e. Lack of membership and effective participation of the State in international or regional organizations that establish mandatory membership obligations;
- f. Lack of exposure, openness or establishment of political or economic relations with other States or organizations;
- g. Limited cooperation of the State with international and regional human rights mechanisms;
- h. Lack of incentives or willingness of parties to a conflict to engage in dialogue, make concessions and receive support from the international community;

- i. Lack of interest, reluctance or failure of States Members of the United Nations or members of international or regional organizations to support a State to exercise its responsibility to protect populations from atrocity crimes, or to take action when the State manifestly fails that responsibility;
- j. Lack of support by neighbouring States to protect populations at risk and in need of refuge, including by closure of borders, forced repatriation or aid restriction;
- k. Lack of an early warning mechanism relevant to the prevention of atrocity crimes.

Risk factor 7. Enabling circumstances or preparatory action

- a. Imposition of emergency laws or extraordinary security measures that erode fundamental rights;
- b. Suspension of or interference with vital State institutions, or measures that result in changes in their composition or balance of power, particularly if this results in the exclusion or lack of representation of protected groups;
- c. Strengthening of the security apparatus, its reorganization or mobilization against protected groups, populations or individuals;
- d. Acquisition of large quantities of arms and ammunition or of other objects that could be used to inflict harm;
- e. Creation of, or increased support to, militia or paramilitary groups;
- f. Imposition of strict control on the use of communication channels, or banning access to them;
- g. Expulsion or refusal to allow the presence of non-governmental organizations, international organizations, media or other relevant actors, or imposition of severe restrictions on their services and movements;
- h. Increased violations of the right to life, physical integrity, liberty or security of members of protected groups, populations or individuals, or recent adoption of measures or legislation that affect or deliberately discriminate against them;
- i. Increased serious acts of violence against women and children, or creation of conditions that facilitate acts of sexual violence against those groups, including as a tool of terror;
- j. Imposition of life-threatening living conditions or the deportation, seizure, collection, segregation, evacuation or forced displacement or transfer of protected groups, populations or individuals to camps, rural areas, ghettos or other assigned locations;
- k. Destruction or plundering of essential goods or installations for protected groups, populations or individuals, or of property related to cultural and religious identity;
- l. Marking of people or their property based on affiliation to a group;
- m. Increased politicization of identity, past events or motives to engage in violence;
- n. Increased inflammatory rhetoric, propaganda campaigns or hate speech targeting protected groups, populations or individuals.

Risk factor 8. Triggering factors

- a. Sudden deployment of security forces or commencement of armed hostilities;
- b. Spillover of armed conflicts or serious tensions in neighbouring countries;
- c. Measures taken by the international community perceived as threatening to a State's sovereignty;
- d. Abrupt or irregular regime changes, transfers of power, or changes in political power of groups;

-
- e. Attacks against the life, physical integrity, liberty or security of leaders, prominent individuals or members of opposing groups; other serious acts of violence, such as terrorist attacks;
 - f. Religious events or real or perceived acts of religious intolerance or disrespect, including outside national borders;
 - g. Acts of incitement or hate propaganda targeting particular groups or individuals;
 - h. Census, elections, pivotal activities related to those processes, or measures that destabilize them;
 - i. Sudden changes that affect the economy or the workforce, including as a result of financial crises, natural disasters or epidemics;
 - j. Discovery of natural resources or launching of exploitation projects that have a serious impact on the livelihoods and sustainability of groups or civilian populations;
 - k. Commemoration events of past crimes or of traumatic or historical episodes that can exacerbate tensions between groups, including the glorification of perpetrators of atrocities;
 - l. Acts related to accountability processes, particularly when perceived as unfair.

V. Document

REPUBLIQUE DU BURUNDI

Bujumbura, le 30 Juin 2021



 FORCE DE DEFENSE NATIONALE DU BURUNDI

 COMMANDEMENT DE LA FORCE DE LA MARINE

N° 308/03.0310

Au Comd BIL
 Comd UFL
 Info : Chef de la FDNB-G3

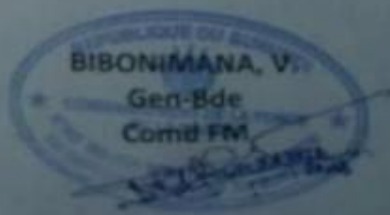
Objet : Renforcement de la sécurité

1. La situation sécuritaire se porte bien sur tout le territoire national. Cependant, sur la frontière ouest on signale des groupes armés de TABARA et NZABAMPEMA qui ambitionnent de s'infiltrer sur notre territoire pour déstabiliser la sécurité. Pareil cas est à signaler coté frontière Nord de notre pays. A l'intérieur sur certains axes routiers, on enregistre des cas isolés de criminalité imputables à des bandes armées non identifiées.

2. Il revient aux Corps de Défense et de Sécurité dont la Force de la Marine d'en finir avec cette situation et ainsi mettre hors d'état de nuire ces bandes armées.

Pour cela au tour de la célébration du 59^{ème} anniversaire de l'Indépendance, il faut:

- ✓ Identifier des zones chaudes et y installer des centres opérationnels dans votre secteur de responsabilité ;
- ✓ Aider l'administration dans l'encadrement de la population à travers ces centres Ops ;
- ✓ Associer les anciens membres des Corps de Défense et de Sécurité et Mouvements Politiques Armés;
- ✓ Renforcer la quadrilogie,
- ✓ Intensifier la recherche du renseignement ;
- ✓ Multiplier des patrouilles sur les axes ;
- ✓ Multiplier des fouilles ciblées approfondies des véhicules;
- ✓ Organiser un commandement de proximité et encadrer vos militaires par des inspections régulières ;
- ✓ Eviter de culpabiliser dans la globalisation les anciens combattants (Ex militaires, Ex policiers, Ex membres des Mouvements Politiques Armés) dans votre secteur;
- ✓ Renforcer les mesures de sécurités dans les Lacs.



 BIBONIMANA, V.
 Gen-Bde
 Comd FM